

**CC. Diputados Secretarios del
H. Congreso del Estado de Campeche.
Presente.**

En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del propio Estado, por el digno conducto de ustedes, me permito someter a la consideración de la LX Legislatura Estatal una iniciativa de nuevo **Código Penal del Estado de Campeche**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha 30 de mayo del año en curso, el Ejecutivo a mi cargo presentó ante ese H. Congreso del Estado, diversa iniciativa del nuevo Código Penal del Estado de Campeche.

No obstante lo anterior, durante la primera quincena del mes de junio del presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas normas y reformas legislativas en materia penal que resultan de aplicación en nuestra Entidad, mismas que originan la necesidad de implementar una serie de modificaciones y adecuaciones a la diversa iniciativa ya presentada con fecha 30 de mayo del año en curso, a la que se hizo referencia en el párrafo anterior.

Dicha legislación en materia penal que resulta ser de aplicación general consiste en:

- A) Decreto por el que se expide la Ley General de Protección Civil, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 2012, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
- B) Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de junio de 2012, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
- C) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros ordenamientos; mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de junio de 2012, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

La Ley General de Protección Civil, cuyo artículo primero especifica que el objeto de la misma es, entre otros, “...establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil...”, establece, en su artículo 84, como “delito grave”: la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

Con lo anterior, se obliga a las entidades federativas a tomar en consideración el tipo penal contenido en la Ley General en comento y con ello modificar los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, respectivamente.

La presente iniciativa prevé, en su artículo 380, se contempla únicamente la adecuación al Código sustantivo penal, haciendo la remisión a la Ley General de Protección Civil, dejando para presentar con posterioridad, mediante iniciativa aparte, la adecuación correspondiente al Código adjetivo penal.

Por otra parte, y continuando con el tema de la protección civil, el artículo 74, en relación al 73 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche, contiene los supuestos respecto de la actuación de los servidores públicos encargados de conceder permisos de construcción y demás autorizaciones a las que se refieren dichos numerales, con independencia de que esas conductas puedan constituir un delito. En consecuencia, se prevé en el capítulo IV, del Título Décimo Quinto "Delitos contra el erario y el servicio público" de la presente iniciativa.

Por lo que respecta a las conductas que alteran y causan daños al ambiente, es de explorado derecho que existe en la entidad la necesidad de desarrollar metodologías, técnicas, guías e instrumentos que regulen el trabajo de los expertos en los fenómenos naturales, los planificadores y demás responsables en el desarrollo urbano y rural sustentable y en el ordenamiento territorial para que se realicen acciones encaminadas en la reducción del riesgo de desastre, a fin de evitar que las construcciones, obras de infraestructura y asentamientos humanos se lleven a cabo en zonas consideradas como de riesgo, y en su caso, definir las medidas para mitigarlo.

Como ejemplo de nuestras necesidades podemos señalar que en la ciudad de San Francisco de Campeche existen algunos centros habitacionales que se encuentran localizados en zonas de riesgo por inundación, a saber: Fraccionamiento Presidentes de México, Fidel Velázquez, Plan Chac, entre otros, que de manera recurrente y por lluvias tanto ordinarias como extraordinarias, sufren afectaciones por inundaciones, que causan perjuicios a sus habitantes además de daños materiales y pérdidas de menaje en forma frecuente, causando con ello actos de molestia en la población que ahí radica. Estos fraccionamientos presuntamente se construyeron sin ningún análisis de riesgo por parte de las autoridades para determinar si se ubicaban los terrenos en zonas de bajos inundables, además de que la urbanización en los lomeríos aledaños a esta zona aumentaron el peligro al permitir una mayor concentración de agua tras cada precipitación, independientemente que no se exigieron mecanismos reguladores por parte de las autoridades correspondientes que reduzcan el nivel de peligro o riesgo, como son zonas de áreas verdes o zonas de captación de agua. Todo lo anterior produce obligaciones a cargo del Estado consistentes en realizar fuertes inversiones para poder ejecutar obras de mitigación en beneficio de los habitantes de esos lugares como por ejemplo, la ampliación de la red de drenaje, obras que si hubiesen sido planificadas desde el inicio, el costo económico y social hoy sería menor actualmente.

De ahí la importancia de considerar la planificación territorial en el Estado de Campeche como un proceso político-técnico a través del cual se organiza el uso y ocupación del territorio en función de sus características biofísicas, socio-económicas, culturales, político-institucionales, sus potencialidades y limitaciones a efectos de generar procesos de desarrollo sostenible.

Con la planificación territorial las autoridades de protección civil buscan entre otras cosas:

- 1.- Optimizar la organización de los asentamientos humanos, la infraestructura y las actividades económicas.
- 2.- Promover el uso adecuado de los recursos naturales y de las áreas de fragilidad ecológica así como de régimen especial, incluyendo su recuperación.
- 3.- Orientar las inversiones públicas y privadas a través de la formulación e implementación de políticas de uso y de ocupación del territorio que consideran las normas que condicionan la sostenibilidad de los medios naturales y humanos.
- 4.- Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las personas, bienes e infraestructura frente a amenazas socio naturales y tecnológicas.

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, el objetivo cuarto señalado en el párrafo anterior es el más importante. Por esta razón y con el fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Protección Civil, en la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche y en el Programa Estatal de Desarrollo 2009 – 2015, se propone tipificar diversas conductas en materia de ocupación, construcción, edificación y realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas de reserva ecológica municipal o estatal, zonas consideradas no aptas para la vivienda y zona considerada como “*suelo de conservación*” de conformidad con el o los programas de ordenamiento ecológico aplicables y Planes y programas de desarrollo urbano en general. La tipificación en comento se contempla en el Título Vigésimo Segundo, Capítulo III denominado “Alteración y daños al ambiente”.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos contempla, entre otras situaciones novedosas, un nuevo concepto de reparación del daño a saber:

“Artículo 48...

La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida...”

Es por ello que en el artículo 39 de la presente iniciativa se establece que proyecto de vida será el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que se generen en base a valores, creencias y convicciones, que buscan cumplir objetivos específicos que son elegidos de manera consciente y voluntaria, mismos que forman parte de un plan general de vida, es decir, la dirección que una persona marca para su existencia.

A la luz de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en Comento, se elaboró el texto de los artículos 160, 226, 253, 256, 260 a 263, entre otros, para verificar que los supuestos contenidos en

los mismos no encuadraran en los tipos penales ya señalados en la dicha Ley General, respetando así el ámbito de competencia federal en este tema.

De las modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se tomaron diversos conceptos relacionados con el delito de feminicidio, por lo que en este proyecto ya se prevé la disposición relativa al ilícito de referencia que resultó ser de competencia estatal (artículo 160 de la presente iniciativa).

El segundo párrafo del artículo Segundo Transitorio que contiene la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 instruye, entre otros aspectos, que los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones o nuevos ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio.

En cumplimiento a la disposición señalada con anterioridad, el Ejecutivo a mi cargo pone a su consideración la presente iniciativa actualizadora de nuevo Código Penal del Estado, que constituye la base para la implementación de un nuevo derecho penal adjetivo, pues éste requiere de la precisión de las reglas penales que conforman el derecho penal material.

Es decir, primeramente se requiere la expedición de las normas que regularán la conducta de los individuos de una sociedad (derecho penal sustantivo), referentes al delito y a la seguridad, en plena concordancia con la reforma constitucional a la que se hizo referencia en el primer párrafo de la presente exposición de motivos, para que, con posterioridad, se defina el vehículo o el medio por el cual se harán regir esas normas impuestas y aprobadas (derecho penal adjetivo).

La presente iniciativa corresponde al área del derecho penal sustantivo, constituyendo así un conjunto de normas relativas a los delitos, a las penas ya las medidas de seguridad con las cuales contará el Estado para enfrentar las conductas antisociales en el marco del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, más acorde a un Estado democrático de derecho.

A mayor abundamiento y para efectos de esta iniciativa, el sistema de justicia penal de corte acusatorio se entenderá como aquel sistema que constituye un procedimiento de partes en el que éstas deciden sobre la forma de llevar a cabo el desahogo de la prueba, y queda la decisión de culpabilidad y la fijación de la pena en manos del juez.

La iniciativa se divide en dos grandes Libros: la parte general y la parte especial; en ambas, se parte de la base del principio constitucional de que “no hay delito ni pena sin ley previa”, por lo que en esta iniciativa se describen las diversas especies de delito, se señalan las características de toda infracción penal y se determina la naturaleza y la magnitud de las penas y de las medidas de seguridad, así como las bases de su duración.

La parte general (Libro Primero) la integran seis Títulos, a saber: Título Primero: “Los derechos humanos en materia penal”. Título Segundo: Los ámbitos de la aplicación de la Ley Penal; Título

Tercero: El Delito; Título Cuarto: Las consecuencias jurídicas del delito; Título Quinto: La aplicación de las sanciones, y, Título Sexto: La extinción de la Responsabilidad Penal.

De los Títulos del Libro Primero anteriormente señalados, sobresale el Primero: “Los derechos humanos en materia penal”, puesto que el mismo se conformó a la luz de las reformas constitucionales de dicha materia publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2011. En dicha modificación se reitera la obligatoriedad del respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales ratificados por éste.

Dentro de la parte general de la presente iniciativa se prevé de manera novedosa la clasificación de la aplicación de la legislación penal por espacio, por tiempo, en relación a las personas; así como el apartado relativo a leyes especiales y al concurso aparente de las normas; precisiones de las que carece el código penal vigente al momento de presentación de esta iniciativa.

Siguiendo con las nuevas figuras, se prevé el caso de las personas morales; es decir, aunque sólo pueden ser plenamente responsables las personas físicas, se previene que cuando un miembro o representante de una persona moral, con excepción de las entidades públicas del Estado, cometa algún delito con los medios que para el objeto de la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquella, el juez competente impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente, con intervención del representante legal, las consecuencias previstas en la propia legislación penal, independientemente de la responsabilidad en que hubiere incurrido las personas físicas por los delitos cometidos.

En la parte especial (Libro segundo) se contemplan veinticinco Títulos que se denominan: Título Primero: Delitos contra la vida y la integridad corporal; Título Segundo: Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual; Título Tercero: Delitos contra la paz y la seguridad social ; Título Cuarto: Delitos contra la inviolabilidad del secreto; Título Quinto: Delitos contra el patrimonio; Título Sexto: Delitos contra la familia; Título Séptimo: Delitos contra la seguridad de la comunicación; Título Octavo: Delitos contra la fe pública y la autenticidad documental; Título Noveno: Delitos contra la dignidad y el honor de las personas; Título Décimo: Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad; Título Décimo Primero: Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones; Título Décimo Segundo: Delitos contra la seguridad pública; Título Décimo Tercero: Delitos contra la prestación adecuada del servicio profesional; Título Décimo cuarto: Delitos contra la seguridad de los bienes jurídicos; Título Décimo quinto: Delitos contra el erario y el servicio público; Título Décimo Sexto: Delitos cometidos por servidores públicos en el ámbito de la administración de justicia; Título Décimo Séptimo: Delitos contra la administración de la justicia; Título Décimo Octavo: Delitos contra la veracidad necesaria para la adecuada administración de justicia; Título Décimo Noveno: Delitos contra el ejercicio legítimo de la autoridad; Título Vigésimo: Delitos contra el respeto a los símbolos institucionales; Título Vigésimo Primero: Delitos

contra la libertad personal; Título Vigésimo Segundo: Delitos contra la salud pública, el ambiente y los ecosistemas; Título Vigésimo Tercero: Delitos en materia electoral; Título Vigésimo Cuarto: Delitos contra la seguridad del Estado; y, Título Vigésimo Quinto: Delitos contenidos en leyes especiales.

Dentro de los delitos especiales cabe resaltar que el concepto empleado en el artículo 155 de esta iniciativa de nuevo Código Penal del Estado de Campeche fue tomado de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Procuraduría General de la República contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por la despenalización del aborto en su Código Penal.

En 2007 el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) definió al embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del conceptus en la mujer. El embarazo se inicia en el momento de la nidación y termina con el parto.

La definición legal del embarazo sigue a la definición médica: para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación). Entonces el blastocito atraviesa el endometrio uterino e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación.

Este concepto de embarazo, a su vez, coincide con lo definido por la Organización Mundial de la Salud como “la parte de la reproducción humana que comienza con la implantación”.

La Ley General de Salud no conceptualiza al embarazo, pero sí establece los conceptos de embrión y feto:

“Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:

I al VII ...

VIII. Embrión, al producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término de la duodécima semana gestacional;

IX. Feto, al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno;

X al XVII ...”

De esta forma, el artículo en comento está acorde a la edad gestacional que la propia Ley General de Salud le da al producto de la concepción en sus dos etapas de desarrollo. Estas doce semanas son las que se toman como referencia para las sanciones establecidas. Menos de doce semanas de gestación tiene una penalización menor ya que el embrión no cuenta con forma humana, no es

considerado totalmente viable para nacer y, si el aborto es practicado durante este tiempo, la mujer no corre peligro. Después de las doce semanas, el feto ya tiene forma humana y tiene desarrollado sus sentidos cognitivos, además de que, practicado a partir de las doce semanas hasta el momento del parto, la mujer pone en alto riesgo su vida. A la luz de los razonamientos anteriores se observa que ni al embrión ni al feto se les puede considerar personas biológicamente autónomos.

Por lo que respecta al delito de robo se tomó en cuenta al momento de elaborar la presente iniciativa que los delitos patrimoniales se encuentran en primer lugar de las conductas delictivas en todas las Entidades Federativas, se realizaron sendos cuadros comparativos, mismos que se anexan al presente, para verificar en la región conformada entre los Estados de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, cuáles son las penalidades y la forma de tipificar el delito de robo y se analizó también el artículo 367 del Código Penal Federal en vigor.

Delo señalado en el párrafo anterior se concluyó que debían aplicarse, tratándose del delito de robo, además de la pena privativa de libertad y de las multas, medidas de seguridad, como jornadas de trabajo a favor de la comunidad y tratamiento en semilibertad, figuras que resultan novedosas porque se implementan por primera vez en el Código Penal del Estado para sancionar a quienes comentan el delito que nos ocupa, cuando el monto de lo robado no exceda de cien veces el salario mínimo diario general aplicable en la Entidad o cuando el monto de lo robado exceda de cien pero no de trescientos salarios mínimos, respectivamente.

Dentro de las figuras novedosas que se incluyen en la presente iniciativa también destaca el delito de extorsión.

Respecto del delito de extorsión, que se ubica dentro de los delitos patrimoniales, la doctrina señala que consiste en obligar a otro a hacer o dejar de hacer algo para obtener un lucro y causando un perjuicio patrimonial y que, en su versión más simple, la extorsión se manifiesta por la amenaza del extorsionador de causar un daño a la víctima o sus familiares, o a sus bienes o los de sus familiares, si no se le entrega alguna cantidad de dinero o bienes o valores, una sola vez o periódicamente. Por otra parte, se verificó que el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., en el portal de México Unido contra la Delincuencia, A.C., detecta hasta 16 modalidades de extorsión, entre las que destacan la exacción mediante amenazas de secuestro, de muerte, de destrucción de bienes de la víctima o de sus seres queridos; el “derecho de piso”, “de peaje” o “de gobierno”. Esta última modalidad se da cuando se extorsiona a las autoridades públicas, por ejemplo a los presidentes municipales, para “dejarlos gobernar”, etcétera.

Dado que la conducta delictiva en comento se realiza con bastante frecuencia se optó en esta iniciativa por dedicar un capítulo al mismo a partir del artículo 209 de la presente.

Otras inclusiones novedosas de la presente iniciativa se contemplan dentro de los delitos cometidos por servidores públicos en el ámbito de la administración de justicia, consistentes en tipificar la aprehensión ilegal y el retardo ilegítimo en la entrega de un detenido, entre otros. Ambas figuras se encuentra totalmente armonizadas con la nueva perspectiva del principio de presunción de inocencia que impera en el nuevo sistema penal acusatorio de carácter adversarial que ya obra implementado en la Constitución General de la República.

Por lo que respecta al delito de narcomenudeo también se tomó en cuenta la reforma respectiva publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de agosto de 2009 mediante la cual se reforma la fracción XXIII del artículo 3; el párrafo primero del artículo 192; y se adiciona un apartado C al artículo 13, un párrafo segundo al artículo 191, los párrafos segundo, tercero y cuarto con dos fracciones al artículo 192; el artículo 192 Bis; el artículo 192 Ter; el artículo 192 Quáter; el artículo 192 Quintus; el artículo 192 Sextus; el artículo 193 Bis; un párrafo segundo al artículo 204; un Capítulo VII denominado "Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo" al Título Décimo Octavo; los artículos 473 a 482, todos de la Ley General de Salud, que resulta de aplicación para todas las Entidades Federativas.

A la presente iniciativa se anexa una tabla con la lista de los delitos contenidos en la misma, la cual forma parte integrante del proyecto que nos ocupa.

Finalmente, con el propósito de implementar un modelo en el sistema penal que proponga una solución de los conflictos sociales de manera más eficiente y más acorde a las circunstancias del ser humano, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales señaladas al principio de esta iniciativa, así como a la legislación general penal publicada en el presente mes de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, y por todas las demás razones expuestas con anterioridad, me permito someter a la consideración de esa soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de:

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

TÍTULO PRIMERO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA PENAL

CAPÍTULO ÚNICO PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.- Este Código se aplicará en estricto apego a los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Artículo 2.- Ante la ley penal todos son iguales, sin embargo, la autoridad jurisdiccional deberá tomar en consideración para su aplicación las características de los grupos vulnerables.

Artículo 3.- No podrá imponerse sanción o medida de seguridad prevista en una ley, sino por una acción u omisión expresamente considerada como delito en la ley vigente al momento de su realización, siempre que concurren los presupuestos que para cada uno de ellos señale la ley.

Artículo 4.- Queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, sanción alguna que no esté decretada por la ley exactamente aplicable al delito de que se trate. De igual manera, queda prohibida la retroactividad de las leyes penales en perjuicio de persona alguna.

Artículo 5.- Para que una acción u omisión sea punible se requiere que ponga en peligro o que lesione, con dolo o sin causa justa, algún bien jurídico tutelado por la ley.

Artículo 6.- Todo acusado será considerado inocente hasta que no se declare su responsabilidad mediante sentencia que cause ejecutoria emitida por el juez competente.

Artículo 7.- La culpabilidad del autor será el fundamento para establecer la sanción, la cual debe ser proporcional y racional al delito y al bien jurídico tutelado. Se deben considerar los efectos derivados de la sanción para la vida futura del autor en la sociedad.

Artículo 8.- Las medidas de seguridad tienen su base en la demostración de un hecho ilícito. No pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la sanción aplicable al delito cometido, ni exceder el límite de lo necesario en base al acto cometido.

Artículo 9.- No podrá ejecutarse sanción alguna, sino en virtud de sentencia que cause ejecutoria, dictada por una autoridad competente, de acuerdo a las leyes procesales.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

CAPÍTULO I APLICACIÓN DE LA LEY EN EL ESPACIO

Artículo 10.- Este Código se aplicará por los delitos cometidos en el territorio del Estado de Campeche que sean competencia de sus tribunales.

Artículo 11.- Se aplicará también este Código por los delitos que se inicien, preparen o cometan fuera del Estado, cuando produzcan efectos en el territorio del Estado de Campeche, si se reúnen las siguientes circunstancias:

- I. Que los hechos delictuosos de que se trate tengan ese carácter en todas las jurisdicciones que intervienen;
- II. Que el acusado no haya sido definitivamente juzgado por los mismos hechos en el lugar en que los cometió.

Artículo 12.- Los delitos continuados y los permanentes, cometidos en otra entidad federativa, se perseguirán con arreglo a las leyes del Estado de Campeche cuando la comisión persista dentro del territorio del Estado.

CAPÍTULO II APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO

Artículo 13.- Es aplicable la ley penal vigente al tiempo de la realización del hecho punible. Los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar.

Artículo 14.- Cuando entre la comisión de un delito y la imposición de la sanción inicie la vigencia de otra ley aplicable al caso, se estará de oficio a lo dispuesto en la ley más favorable al imputado.

Artículo 15.- Cuando pronunciada una sentencia irrevocable en que se hubiere impuesto una sanción privativa de libertad, se dictare una ley que deje subsistente la sanción señalada al delito, pero disminuya su duración, se reducirá la sanción impuesta en la misma proporción en que estén el máximo de la señalada en la ley anterior y el de la señalada en la posterior.

Artículo 16.- Cuando entre la perpetración de un delito y la extinción de la sanción se promulguen leyes que disminuyan la sanción o sanciones establecidas en la ley vigente al cometerse el delito, se aplicará la nueva ley.

Artículo 17.- Cuando una nueva ley deje de considerar una acción u omisión como delito, se ordenará la libertad de los procesados o sentenciados y cesará el procedimiento o los efectos de la sentencia, con excepción de la reparación del daño, cuando ya se haya hecho efectiva.

Artículo 18.- Si se trata de medidas de seguridad impuestas como consecuencias del delito, se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores.

CAPÍTULO III APLICACIÓN DE LA LEY EN RELACIÓN A LAS PERSONAS

Artículo 19.- Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las personas a partir de los dieciocho años de edad cumplidos.

Artículo 20.- La responsabilidad penal sólo es atribuible a la persona y bienes de los delincuentes.

CAPÍTULO IV LEYES ESPECIALES Y CONCURSO APARENTE DE NORMAS

Artículo 21.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley local especial, se aplicará esta última, y se observarán las disposiciones generales de este Código en lo no previsto por aquélla.

Artículo 22.- Cuando una misma conducta pueda ser calificada por diversas disposiciones penales, se observarán las siguientes reglas:

- I. El precepto especial se aplicará con preferencia al general;
- II. El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal;
- III. El precepto penal más amplio o complejo absorberá los que castiguen las conductas de menor alcance.

TÍTULO TERCERO EL DELITO

CAPÍTULO I FORMAS DE COMISIÓN

Artículo 23.- El delito sólo puede ser realizado por acciones o por omisiones dolosas o culposas sancionadas por la ley.

Cuando el tipo prevea una acción con resultado material o una omisión que genere un resultado material, el autor de la actividad o inactividad es también autor de tal resultado sólo cuando éste es un efecto producido por dicha actividad o inactividad. No será autor del resultado si éste sobrevino en virtud de un acontecimiento extraño a su propia actividad.

Artículo 24.- Las acciones y omisiones delictivas pueden ser:

- I. Dolosas: Obra dolosamente, quien voluntaria y deliberadamente comete un delito a sabiendas de su ilicitud; ya sea que el resultado coincida con el propósito del agente, o que el agente se proponga un fin y sabe que seguramente surgirán otros resultados delictivos, o que el agente tenga la intención genérica de delinquir sin proponerse un resultado delictivo en especial, o que el agente desee un resultado delictivo y prevea la posibilidad de que surjan otros no requeridos directamente;
- II. Culposas o imprudenciales: Obra culposa o imprudencialmente quien prevé el posible resultado penalmente tipificado, pero no lo quiere y abriga la esperanza de que no se produzca; o quien no prevé el cuidado posible y adecuado para no producir o, en su caso, evitar el previsible y evitable resultado típico en contra de un bien jurídico tutelado, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

Artículo 25.- Quien omita evitar un resultado material descrito en un tipo de acción será considerado autor del mismo, si éste tenía el deber de evitarlo, sólo si:

- I. Es garante del bien jurídico, por:
 - a. Aceptar efectivamente su custodia;
 - b. Generar el peligro para el bien jurídico con una actividad precedente imprudencial;
 - c. Hallarse en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o sobre quien se ejerza la tutela.
- II. De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo;
- III. Su actividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo.

Artículo 26.- El delito es:

- I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos;
- II. Permanente, cuando la consumación se prolonga en el tiempo;
- III. Continuado, cuando con una unidad de propósito delictivo y pluralidad de conductas, que afectan bienes jurídicos tutelados del mismo sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal.

CAPÍTULO II CONCURSO DE DELITOS

Artículo 27.- Existe concurso real cuando con pluralidad de acciones u omisiones de una persona o personas se cometan varios delitos.

Existe concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se cometan varios delitos.

No hay concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado.

Tampoco existe concurso de delitos:

- I. Si las disposiciones legales violadas por el imputado son incompatibles entre sí. En este caso, se aplicará la disposición que señale la sanción más grave;

- II. Si uno o varios delitos constituyen un grado o grados de otro delito, o un medio o medios para cometer este otro delito. En este caso, se aplicará la disposición que castigue este último;
- III. Si un delito constituye un elemento de otro delito o una circunstancia agravante de su penalidad. En este caso, se aplicará la disposición que castigue este último delito.

CAPÍTULO III TENTATIVA

Artículo 28.- Existe tentativa punible cuando, mediante el uso de medios eficaces e idóneos, se ejecutan o exteriorizan total o parcialmente actos encaminados directa o inmediatamente a la realización de un delito, o se omiten los que deberían evitarlo, si no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, pero que provocan un peligro al bien jurídico tutelado. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito no se impondrá sanción o medida de seguridad alguna; pero si la acción u omisión ejecutada constituyen por sí mismas algún delito distinto, se aplicará a éste la sanción que corresponda.

CAPÍTULO IV AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

Artículo 29.- Son responsables del delito cometido, según el caso:

- I. Autores intelectuales, los que acuerden o preparen su realización;
- II. Autores directos, los que lo realicen por sí;
- III. Coautores, los que lo realicen conjuntamente;
- IV. Autores mediatos, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento;
- V. Instigadores, los que induzcan dolosamente a otro u otros a cometerlo;
- VI. Cómplices, los que dolosamente presten ayuda o auxilio a otro para la ejecución del hecho delictivo;
- VII. Los que con posterioridad a la comisión de un delito ayuden al delincuente.

Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

En los casos a que se refieren las fracciones V, VI y VII se impondrá la mitad de la sanción que corresponda al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva.

Artículo 30.- Si varias personas participan en la realización de un delito determinado y alguna de ellas comete un delito distinto al acordado, todas serán responsables de la comisión del nuevo delito, según su propia culpabilidad, cuando concurra, al menos, alguno de los siguientes requisitos:

- I. Que el nuevo delito sirva de medio adecuado para cometer el principal;
- II. Que aquél sea una consecuencia necesaria o natural de éste;
- III. Que cuando hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito, no hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo.

Artículo 31.- Hay complicidad correspectiva o autoría indeterminada cuando varias personas intervienen en la comisión de un delito y no se precisa el resultado que cada quien produjo.

CAPÍTULO V PERSONAS MORALES

Artículo 32.- Para los efectos de este Código, sólo pueden ser penalmente responsables las personas físicas. Sin embargo, cuando un miembro o representante de una persona moral, con excepción de las entidades públicas del Estado, cometa algún delito con los medios que para tal objeto la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el juez competente impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente, con intervención del representante legal, las consecuencias previstas en este Código, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por los delitos cometidos.

CAPÍTULO VI CAUSAS QUE EXCLUYEN EL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD

Artículo 33.- Se considerarán causas de exclusión del delito y de la responsabilidad penal:

- I. Ausencia de conducta.- La inexistencia de voluntad en la actividad o inactividad del agente que produjo el resultado;
- II. Atipicidad.- La falta de alguno de los elementos configurativos del delito de que se trate;
- III. Legítima defensa.- Repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa, racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de quien lo defiende o que el daño que iba a causar el agresor no hubiese podido ser fácilmente reparado después por medios legales;
- IV. Presunción de legítima defensa.- Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al hogar del que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de la que el inculpado tenga la obligación de defender, o a sus dependencias, o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación.

También se presumirá legítima defensa cuando se trate de impedir o se impida la comisión de un delito a bordo de vehículos destinados al transporte público o privado; asimismo, cuando se produzca un daño en contra de quien obstaculice un camino o carretera con el objeto de cometer un delito y, en general, cuando se actúe contra quien se encuentre en algún lugar y en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;

- V. Estado de necesidad.- La necesidad de salvaguardar un bien jurídico, propio o ajeno, de un peligro grave, actual e inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, que lesione otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro

- no sea evitable por otros medios y el sujeto activo no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;
- VI. Obediencia jerárquica.- Obrar en virtud de mandato legítimo de un superior jerárquico, aun cuando la orden constituya un delito, si esta circunstancia no es notoria, ni se prueba que el inculpado la conocía, ni era previsible racionalmente;
 - VII. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho.- Proceder en forma legítima a realizar una acción u omisión en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho consignado en la ley, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho y siempre que este último no se haga con el sólo propósito de perjudicar a otro;
 - VIII. Consentimiento.- Actuar con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, o del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se llenen los siguientes requisitos:
 - a. Que el bien jurídico se encuentre disponible;
 - b. Que el titular, o quien esté legitimado para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien;
 - c. Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio de éste. Se presume que hay consentimiento tácito cuando el hecho se realice en circunstancias tales que permitan suponer, fundadamente, que de haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el consentimiento.
 - IX. Impedimento legítimo o insuperable.- La contravención de lo dispuesto en una ley penal, por impedimento legítimo o insuperable que calificará el juez;
 - X. Inimputabilidad y conducta libre en su causa.- Cuando al momento de realizar el hecho típico, el agente padezca enajenación mental, trastorno mental transitorio, desarrollo intelectual retardado o cualquier otro estado mental, que le impida comprender el carácter ilícito de aquél y conducirse de acuerdo con esa comprensión, excepto en los casos en que el propio agente haya provocado esa incapacidad con el propósito de cometer el delito;
 - XI. Error de tipo y de prohibición invencible.- Se realice la acción o la omisión bajo un error:
 - a. Sobre alguno de los elementos que integran el delito;
 - b. Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta, dado su retraso cultural o aislamiento social;
 - c. Si los errores a que se refieren el inciso anterior son vencibles, se estará a lo dispuesto por el artículo 90 de este Código.
 - XII. Inexigibilidad de otra conducta.- Cuando atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta antijurídica, no sea racionalmente posible exigir al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar conforme a derecho;
 - XIII. Caso fortuito.- Cuando se produzca un resultado típico, que no se previó por ser imprevisible, en la ejecución de un hecho lícito con todas las precauciones debidas.

Artículo 34.- Las causas de exclusión se investigarán y se harán valer de oficio o a petición de parte interesada, en cualquier estado del procedimiento.

TÍTULO CUARTO DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO

CAPÍTULO PRELIMINAR DE LAS SANCIONES, CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LAS PERSONAS MORALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 35.- Las consecuencias jurídico-penales que se pueden imponer con arreglo a este Código son:

A. Sanciones:

- I. Prisión;
- II. Tratamiento en libertad y semilibertad de imputables;
- III. Reparación del daño;
- IV. Multa;
- V. Trabajo a favor de la comunidad;
- VI. Trabajo obligatorio para reparación del daño;
- VII. Suspensión de derechos;
- VIII. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito;
- IX. Suspensión, destitución o inhabilitación de cargos, comisiones o empleos.

B. Consecuencias jurídicas para las personas morales:

- I. Suspensión;
- II. Disolución;
- III. Prohibición;
- IV. Remoción;
- V. Intervención.

C. Medidas de seguridad:

- I. Vigilancia de la autoridad;
- II. Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir a él;
- III. Tratamiento de inimputables;
- IV. Tratamiento especializado para farmacodependencia;
- V. Tratamiento especializado para alcoholismo;
- VI. Tratamiento psicológico o psiquiátrico.

CAPÍTULO I PRISIÓN

Artículo 36.- La prisión consiste en la privación de la libertad. Ninguna sanción privativa de la libertad que se imponga por la comisión de algún delito podrá ser menor de tres días ni mayor de cincuenta años, con las excepciones que esta ley u otra aplicable prevean. Su ejecución se llevará a cabo en los establecimientos o lugares donde disponga la autoridad ejecutora de las sanciones penales en el Estado, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente y en la resolución judicial respectiva. La sanción de prisión se sujetará a las reglas siguientes:

- I. Las mujeres cumplirán sus sanciones en lugares separados de los destinados a los hombres;
- II. Los acusados que deban guardar prisión preventiva serán reclusos en sección especial separada de la reservada a los sentenciados;
- III. Toda sanción de prisión será medida en años, meses y días y se computará el tiempo transcurrido en prisión preventiva;
- IV. Si se trata de dos o más sanciones de prisión impuestas en sentencias diferentes, se cumplirán invariablemente de manera sucesiva, sin que la suma de ellas sea mayor de setenta años;
- V. Tratándose de los delitos de homicidio doloso en perjuicio de personas provenientes de grupos vulnerables, especialmente mujeres o menores de edad, deberá imponerse sanción, aun cuando con ello se exceda el máximo de la sanción de prisión;
- VI. Cuando varios delitos dolosos sean cometidos por miembros de corporaciones policíacas, autoridades ministeriales, judiciales o de ejecución de sanciones y medidas de seguridad, en cualquier grado de participación, deberá imponérseles la sanción que corresponda para cada uno de ellos, aun cuando con ello se exceda el máximo de la sanción de prisión señalada en la fracción IV del presente artículo; y
- VII. Lo dispuesto en la fracción anterior será aplicable a los exintegrantes de las instituciones o corporaciones citadas, cuando empleen cualquier tipo de conocimiento, habilidad o información que hubiesen adquirido u obtenido durante el ejercicio del cargo, siempre y cuando se trate de los delitos dolosos de homicidio, extorsión, robo, o daños ocasionados mediante incendio, inundación o explosión. En estos casos, podrá aumentarse a la suma total de la sanción impuesta una tercera parte de aquella, aún cuando con ello se exceda el máximo de la sanción de prisión señalada en la fracción IV del presente artículo.

CAPÍTULO II TRATAMIENTO EN LIBERTAD Y SEMILIBERTAD DE IMPUTABLES

Artículo 37.- El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación, según el caso, de las medidas laborales, educativas, de salud o de cualquier otra índole, autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la supervisión de la autoridad ejecutora.

Artículo 38.- La semilibertad implica alternación de períodos de privación de libertad y de tratamiento en libertad. Se aplicará conforme a lo establecido en la legislación estatal en materia de ejecución de sanciones y medidas de seguridad.

CAPÍTULO III REPARACIÓN DEL DAÑO

Artículo 39.- La reparación del daño es el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima o al ofendido, o a quien tenga derecho. La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y comprenderá cuando menos:

- I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito o la restitución, en cuanto fuere posible, del bien obtenido por el delito en el estado que tenía antes de que se cometiera y sus frutos, o de la depreciación que en su valor comercial, físico o funcional hubiera sufrido, o si no fuere posible, el pago del precio comercial de los mismos al momento en que se haga efectiva;
- II. La indemnización del daño físico, material, psicológico y moral causado. Incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos ortopédicos, asimismo la terapia o tratamiento psicoterapéutico, psiquiátrico, psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la víctima o del ofendido;
- III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;
- IV. El pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante, para ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima o el ofendido y en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo general vigente en el Estado;
- V. El costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales, acorde a sus circunstancias;
- VI. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima o del ofendido, a través de medios electrónicos o escritos; y
- VII. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, cuando el delito se cometa por servidores públicos.

Se entenderá por proyecto de vida al conjunto de actividades, coordinadas e interrelacionadas, que se generen en base a valores, creencias y convicciones, que buscan cumplir objetivos específicos que son elegidos de manera consciente y voluntaria, mismos que forman parte de un plan general de vida, es decir, la dirección que una persona marca para su existencia. Se entenderá por afectación, a las consecuencias derivadas del delito que imposibiliten o disminuyan la capacidad de la víctima o del ofendido para la realización de su proyecto de vida.

Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deberán permitir a la víctima o al ofendido participar de forma plena en la vida pública, privada y social.

Artículo 40.- Tienen derecho a la reparación del daño:

- I. La víctima o el ofendido;
- II. En caso de fallecimiento de la víctima, los ofendidos, en el siguiente orden de prelación:
 - a. El o la cónyuge, la concubina o el concubinario;
 - b. Los descendientes y/o ascendientes que dependan económicamente de la víctima;
 - c. Quien se hubiese encargado en los últimos tres años del cuidado de la víctima, si ésta fuere persona menor de edad, mayor de setenta años, discapacitado o enfermo terminal;
 - d. El Estado, a través del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche;
- III. El Estado, cuando se trate de delitos cometidos en su contra.

Artículo 41.- Están obligados a reparar el daño:

- I. El sujeto activo del delito;
- II. Los tutores y los curadores, por los delitos de los incapacitados que se encuentren bajo su cuidado;
- III. Los directores de internados o talleres que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices, por los delitos que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquéllos;
- IV. Las personas morales o los encargados de negociaciones o de establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos dolosos que cometan sus obreros, jornaleros o empleados y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio;
- V. Las sociedades o agrupaciones constituidas legalmente, por los delitos de sus socios, gerentes o directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan en nombre propio;
- VI. El Estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiariamente cuando aquéllos fueren culposos;
- VII. Los propietarios de vehículos, solidariamente, por los daños que se causen con éstos, aunque no tengan el carácter de tercero obligado.

Artículo 42.- El ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima o el ofendido lo puedan solicitar directamente. Tendrá el carácter de sanción pública cuando haya sido impuesta al acusado mediante sentencia firme.

Artículo 43.- El juez no podrá absolver al sentenciado de la reparación del daño cuando haya sido solicitada por el ministerio público, o la víctima o el ofendido, y hubiese emitido sentencia condenatoria.

Para tal efecto, la víctima, el ofendido, sus dependientes económicos o quien tenga derecho a la reparación del daño, deberá aportar al ministerio público o al juez, en su caso, los datos y pruebas con que cuente para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que prevea el Código Procesal Penal del Estado de Campeche.

Artículo 44.- La reparación será fijada por los jueces según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo a las pruebas obtenidas en el proceso, y atenderá a la capacidad económica del obligado.

Cuando se trate de lesiones, la cuantía de la reparación del daño se fijará conforme a lo dispuesto en la legislación laboral y de seguridad social para las incapacidades permanente total, permanente parcial y temporal. Se tomará como base para el pago la utilidad o salario que a diario recibía la víctima y, de no poderse acreditar éstos, se determinará como base el salario mínimo general aplicable en el Estado al momento del pago, elevado al cuádruplo.

Para efectos de la imposición de estas sanciones no es necesario acreditar que el ofendido laboraba antes de ocurrir los hechos que motivaron el proceso penal ni que con posterioridad a éstos ya no pudo desempeñar su trabajo.

En caso de homicidio, el monto de la reparación del daño se determinará de acuerdo a los ingresos que percibía la víctima, multiplicándolo por el número de días que para el caso de muerte señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de no poder acreditar los ingresos del victimario, o no tenerlos, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo aplicable en el Estado al momento del pago y se extenderá al número de días que para el caso de muerte señala la mencionada ley. En ambos casos, al total que resulte se le adicionarán cinco meses del propio salario mínimo por concepto de gastos funerarios.

En caso de violación o estupro, además de los gastos por tratamientos psicoterapéuticos y curativos, si resultaren hijos como consecuencia de su comisión, la reparación del daño incluirá el pago de los alimentos para el menor y para la madre, en la forma y términos que establece la ley civil para los casos de divorcio.

Artículo 45.- La obligación de pagar la reparación del daño es preferente con respecto a cualesquiera otras contraídas con posterioridad al delito, a excepción de las referentes al pago de alimentos y salarios.

Artículo 46.- Si no se logra hacer efectivo todo el importe de las sanciones pecuniarias, se cubrirá de preferencia la reparación del daño a favor de la víctima y, en su caso, a prorrata entre los ofendidos.

Si la víctima o el ofendido renunciaren a la reparación, o no la hicieren efectiva en un plazo de tres meses contados a partir del día siguiente de que cause ejecutoria la sentencia que otorgue dicha reparación, o no se encuentren identificados, el importe de ésta se aplicará al Estado a través del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.

Los depósitos que garanticen la reparación del daño cuando se dé la garantía económica, se aplicarán como pago de aquélla y serán entregados a la víctima o al ofendido o a su legítimo representante, cuando el inculpado se hubiese sustraído a la acción de la justicia.

Al mandarse hacer efectivos tales depósitos, se prevendrá a la autoridad ejecutora que conserve el importe a disposición de la autoridad judicial, para que se haga su aplicación conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo.

Artículo 47.- Cuando fueren varios los responsables, la reparación del daño se considerará mancomunada y solidaria.

Artículo 48.- Una vez que la sentencia que imponga la reparación del daño haya causado ejecutoria, se procederá conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Campeche.

Artículo 49.- El juzgador o la autoridad a quien le corresponda el cobro, en base al monto del daño y la situación económica del obligado, podrá fijar plazos para el pago de la reparación del daño, los que en su conjunto no excederán de tres años, por lo que se podrá exigir garantía, si lo considera conveniente.

CAPÍTULO IV MULTA

Artículo 50.- La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará en salarios mínimos, de uno a doce mil veces el mismo.

Artículo 51.- Para fijar la multa se tomará en cuenta:

- I. El momento de la consumación, si el delito es instantáneo;
- II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente;
- III. El momento consumativo de la última conducta, si el delito es continuado.

Artículo 52.- El juez considerará las características del caso y podrá fijar un plazo razonable para el pago de la multa o para las exhibiciones parciales de la misma. Si el sentenciado no paga la multa en el tiempo establecido o se negare sin causa justificada a ello, el Estado la exigirá mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Artículo 53.- El importe de la multa se destinará al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.

CAPÍTULO V TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

Artículo 54.- El trabajo a favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados en instituciones educativas, de asistencia social o instituciones privadas asistenciales, en forma tal que no resulte denigrante a la dignidad humana del sentenciado y se ajuste a los términos del tercer párrafo del artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 55.- El trabajo se llevará a cabo en jornadas de tres horas dentro de períodos distintos al horario normal de labores que represente la fuente de ingreso del sentenciado, bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora y procurará que sea acorde a su profesión, oficio o aptitud.

Artículo 56.- El trabajo a favor de la comunidad podrá imponerse como sanción autónoma o sustitutiva de la prisión o de la multa, en su caso.

El juzgador, en uso de su arbitrio judicial, podrá imponer como sanción autónoma el trabajo a favor de la comunidad, además de los casos específicos previstos por este Código. Cuando se encuentre en tal hipótesis, deberá atender a lo establecido en los artículos que anteceden, además tomar en cuenta las circunstancias generales y especiales a que se refieren los artículos 97 y 98 de este ordenamiento.

CAPÍTULO VI SUSPENSIÓN DE DERECHOS

Artículo 57.- La suspensión consiste en la pérdida temporal del ejercicio de algún derecho.

Artículo 58.- La suspensión resulta, por mandato de la ley, de una sanción como consecuencia necesaria de ésta, o se impone como sanción en la sentencia judicial. En el primer caso, la suspensión comienza y concluye con la sanción de la que es consecuencia.

La suspensión que se impone como sanción en la sentencia corre a partir del día en que:

- I. Concluya la sanción privativa de libertad, cuando se impongan ambas sanciones y el sentenciado haya estado recluido en prisión;
- II. Cause ejecutoria la sentencia, cuando dicha suspensión se imponga como sanción única, o junto con una sanción no privativa de la libertad o junto con una sanción privativa de la libertad y ésta haya sido suspendida condicionalmente o sustituida por otra sanción cualquiera.

Artículo 59.- La sanción de prisión, sea o no sustituida, produce la suspensión de los derechos políticos y los de ser tutor, curador, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes y surtirá sus efectos desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia que la imponga.

Artículo 60.- Se aplicarán las reglas de la suspensión de derechos a la sanción de suspensión del derecho para conducir vehículos de motor.

CAPÍTULO VII DECOMISO DE INSTRUMENTOS, OBJETOS Y PRODUCTOS DEL DELITO

Artículo 61.- El decomiso es la aplicación a favor del Estado, por resolución judicial, de los instrumentos, objetos o productos del delito, en los términos establecidos en el presente Código. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito se decomisarán al acusado cuando fuere condenado por delito intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, haya actuado de mala fe, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero como propietario o poseedor y de la relación que, en su caso, tenga con el delincuente.

Si los instrumentos o cosas decomisados son nocivos o peligrosos, se destruirán a juicio de la autoridad jurisdiccional que conozca del caso, en los términos previstos por el Código Procesal

Penal, pero si lo estimare conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito o cosas que sean objeto o producto de él, el juez o tribunal dictará las medidas pertinentes para su conservación, según su utilidad, para beneficio del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.

Artículo 62.- Los objetos de uso lícito o valores que se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras, que no hayan sido decomisados y que no sean reclamados por quien tenga derecho a ello en un lapso de noventa días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo, lo que se le hará saber mediante la notificación correspondiente. Si no se presenta dentro de los noventa días siguientes a la fecha de esta notificación, el producto de la venta se destinará al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, previas las deducciones de los gastos ocasionados.

Artículo 63.- En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad judicial, que no se deban destruir y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo por un lapso de noventa días a partir de la notificación que se le haga, transcurrido el cual, si no hubiese sido reclamado, se destinará al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.

Artículo 64.- Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se haya satisfecho la reparación del daño, podrá el juez o tribunal no decretar el decomiso.

CAPÍTULO VIII

SUSPENSIÓN, DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN DE CARGOS, COMISIONES O EMPLEOS

Artículo 65.- La suspensión consiste en la pérdida temporal del ejercicio de un cargo, comisión o empleo por tiempo determinado. En la suspensión de cargos, comisiones o empleos de cualquier naturaleza, se aplicarán las reglas establecidas en la suspensión de derechos.

La destitución consiste en la privación definitiva del empleo, cargo o comisión en el servicio público. Los efectos de la sanción de destitución iniciarán a partir de que cause ejecutoria la sentencia que la imponga.

La inhabilitación consiste en la incapacidad temporal para obtener y ejercer cargos, comisiones o empleos en el servicio público. En la inhabilitación se aplicarán las reglas de la suspensión de derechos.

CAPÍTULO IX

TRABAJO OBLIGATORIO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Artículo 66.- El trabajo obligatorio como sanción tiene como objeto la reparación del daño a la víctima u ofendido. Tendrá lugar como sanción sustitutiva a la privativa de libertad, cuando el

sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado por la autoridad judicial, en la forma y términos establecidos en la ley aplicable.

CAPÍTULO X SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, DISOLUCIÓN, PROHIBICIÓN, REMOCIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS PERSONAS MORALES

Artículo 67.- La suspensión de actividades consiste en la cesación de la actividad de la persona moral durante el tiempo que determine la autoridad judicial, la cual no podrá exceder de dos años.

Artículo 68.- La disolución consiste en la conclusión definitiva de toda actividad de la persona moral, además de la imposibilidad de constituir una nueva sociedad con el mismo objeto social y con los mismos integrantes.

Artículo 69.- La prohibición de realizar determinados negocios u operaciones se refiere exclusivamente a los que determine la autoridad judicial, que deberán tener relación directa con el delito cometido, y podrá ser hasta por cinco años.

Artículo 70.- La remoción consiste en la sustitución, durante un período máximo de tres años, de los administradores por uno designado por la autoridad judicial.

Artículo 71.- La intervención consiste en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona moral, hasta por tres años.

Al imponer las sanciones previstas en este capítulo, el juez tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona moral, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona moral sancionada.

CAPÍTULO XI VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD

Artículo 72.- La vigilancia de la autoridad consiste en la supervisión y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por personal especializado dependiente de la autoridad competente, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la reinserción social del sentenciado y a la protección de la comunidad.

La autoridad judicial deberá disponer esta supervisión cuando en la sentencia imponga una sanción que restrinja la libertad o derechos, sustituya la privación de libertad por otra sanción o conceda la condena condicional, y en los demás casos en los que la ley disponga. Su duración no deberá exceder de la correspondiente a la sanción o medida de seguridad impuesta.

CAPÍTULO XII

PROHIBICIÓN DE RESIDIR O ACUDIR A UN LUGAR DETERMINADO

Artículo 73.- En atención a las circunstancias del delito, del responsable y de la víctima o del ofendido, la autoridad judicial impondrá la prohibición al sentenciado de que vaya a un lugar determinado o de que resida en él, y conciliará la exigencia de tranquilidad pública y la seguridad de la víctima o del ofendido.

Estas sanciones no podrán ser menores a seis meses ni mayores al término de la sanción de prisión a la que correspondería imponer.

CAPÍTULO XIII

TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES

Artículo 74.- Cuando se trate de sujetos activos del delito con inimputabilidad permanente, la autoridad judicial dispondrá la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad, previo el procedimiento penal respectivo. En el primer caso, el inimputable será internado en la institución correspondiente para su tratamiento durante el tiempo que se estime necesario para su cuidado y control, sin rebasar el tiempo máximo de prisión previsto en este Código.

Para la imposición de la medida a que se refiere este Capítulo, se requerirá que la conducta del sujeto no se encuentre justificada.

En caso de personas con desarrollo intelectual retardado o trastorno mental, la medida de seguridad tendrá carácter terapéutico y se aplicará en lugar adecuado.

Queda prohibido aplicar la medida de seguridad en instituciones de reclusión preventiva o de ejecución de sanciones penales, o sus anexos.

Artículo 75.- La autoridad competente podrá entregar al inimputable a sus familiares o a las personas que conforme a la ley tengan la obligación de hacerse cargo de él, siempre y cuando reparen el daño, se obliguen a tomar las medidas adecuadas para el tratamiento y vigilancia del inimputable y garanticen, a satisfacción de la autoridad judicial, el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

CAPÍTULO XIV

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA FARMACODEPENDENCIA

Artículo 76.- Cuando el sujeto haya sido sentenciado por un delito cuya comisión haya sido determinada por la adicción en el uso de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, independientemente de la sanción que corresponda, se le aplicará tratamiento especializado para farmacodependencia, el cual no podrá exceder del término de la sanción impuesta por el delito cometido.

**CAPÍTULO XV
TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ALCOHOLISMO**

Artículo 77.- El tratamiento especializado para alcoholismo se destinará a cualquier sentenciado con adicción al consumo de bebidas alcohólicas que, a juicio de la autoridad judicial o en los casos previstos en este Código, lo amerite.

No podrá exceder del término de la sanción impuesta por el delito cometido.

**CAPÍTULO XVI
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO O PSIQUIÁTRICO**

Artículo 78.- El tratamiento psicológico o psiquiátrico se destinará a cualquier sentenciado con trastornos mentales temporales que, a juicio de la autoridad judicial o en los casos previstos en este Código, lo ameriten. Estos tratamientos tendrán como objetivo principal el de mejorar las posibilidades de reinserción social y de no reincidencia en el delito.

No podrán exceder del término de la sanción impuesta por el delito cometido.

**TÍTULO QUINTO
DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES**

**CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES**

Artículo 79.- Las sanciones penales tendrán como finalidad:

- I. La protección de los bienes jurídicos determinados en la ley;
- II. La reparación del daño y, en su caso, del pago de los perjuicios;
- III. La reinserción del sentenciado en la sociedad.

Artículo 80.- Dentro de los límites fijados por la ley, la autoridad judicial competente impondrá las sanciones establecidas para cada delito y tendrá en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las particulares del sujeto activo y las demás señaladas en el artículo siguiente.

Artículo 81.- La autoridad judicial, al dictar sentencia condenatoria, determinará la sanción y las medidas de seguridad establecidas para cada delito y las individualizará, dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del delito, el grado de culpabilidad del sujeto activo y el bien jurídico dañado y tomará en cuenta:

- I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados;
- II. La proporción del daño causado o no evitado;
- III. La magnitud de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico;
- IV. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión de realización de la conducta y cualesquiera otras circunstancias relevantes en la ejecución del delito;

- V. Los vínculos de parentesco, amistad o relación social entre el activo y el pasivo y la calidad de las personas ofendidas;
- VI. La edad, el género, el nivel de educación y de cultura, los usos y las costumbres de la etnia a la que pertenezca;
- VII. Los motivos generosos, altruistas, fútiles, egoístas o perversos que lo impulsaron a delinquir y las específicas condiciones fisiológicas y psíquicas en que se encontraba el activo al momento de la comisión del delito;
- VIII. La extracción urbana o rural del agente, el desempleo, o la índole de su empleo, subempleo y su mayor o menor marginación o incorporación al desarrollo económico, político y cultural;
- IX. Las demás circunstancias especiales del agente que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a los requerimientos de la norma.

Artículo 82.- Cuando la ley permita sustituir una sanción mayor por otra de menor gravedad, la autoridad judicial competente deberá aplicar ésta de manera preferente o, en su defecto, manifestará las razones que tenga para no hacerlo.

Artículo 83.- La autoridad judicial competente, a petición de parte, podrá prescindir de la imposición de alguna o algunas de las sanciones previstas en este Código, de manera total o parcial, si la imposición resulta notoriamente innecesaria, o inconveniente, en cualquiera de los casos siguientes:

- I. Cuando con motivo del delito cometido el agente hubiese sufrido consecuencias graves en su persona;
- II. Cuando el agente presente senilidad que le impida valerse por sí mismo;
- III. Cuando padezca enfermedad contagiosa, grave e incurable.

Se exceptúan la reparación del daño y la sanción económica, por lo que no se podrá prescindir de su imposición.

En estos casos, la autoridad judicial tomará en cuenta el resultado de los dictámenes médicos y manifestará con toda precisión las razones de su determinación.

Artículo 84.- Cuando se disponga la disminución o el aumento de una sanción, se entenderá que dicho aumento o disminución operará en relación a los mínimos y máximos de la sanción legal que sirva de referencia, sin rebasar los límites generales previstos en este Código. Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable a la reparación del daño.

Artículo 85.- La autoridad judicial competente determinará el momento a partir del cual deberán cumplirse las sanciones o medidas de seguridad impuestas.

Artículo 86.- Las circunstancias modificativas de la sanción que tienen relación con la acción u omisión sancionada benefician o perjudican a todos los que intervengan, en cualquier grado, en la comisión de un delito.

Las circunstancias personales de alguno o algunos de los delincuentes, cuando sean elementos constitutivos o modificativos del delito, sólo perjudican a los que lo cometan con conocimiento de ellas.

No es imputable al acusado el aumento de gravedad proveniente de circunstancias particulares de la víctima u ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el delito.

CAPÍTULO II DELITOS CULPOSOS

Artículo 87.- Las sanciones aplicables a los delitos culposos serán la cuarta parte de las asignadas por la ley al delito doloso de que se trate y la suma de las sanciones privativas de la libertad no podrá exceder de diez años, a excepción de aquéllas para los que la ley señale una sanción específica.

Igualmente se impondrá, en su caso, inhabilitación o suspensión hasta de diez años o privación de derechos para obtener autorización, licencia o permiso, para ejercer empleo, cargo o comisión públicos, profesión u oficio, correspondientes a la actividad en cuyo ejercicio se cometió el delito.

Artículo 88.- Si al delito doloso corresponde sanción alternativa, el juez competente impondrá al responsable del delito culposo la sanción no privativa de libertad que corresponda.

Artículo 89.- La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del juez, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en los artículos 87 y 88, y las especiales siguientes:

- I. La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que resulte;
- II. El grado del deber de cuidado del inculpado que le es exigible por las circunstancias y condiciones personales que la profesión, oficio o función que desempeñe le impongan;
- III. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes;
- IV. Si tuvo tiempo para desplegar el cuidado posible y adecuado para no producir o evitar el daño que se produjo;
- V. El estado de las cosas, entorno y demás condiciones externas que hayan contribuido al resultado;
- VI. Cualesquiera otras circunstancias relevantes.

CAPÍTULO III ERROR VENCIBLE Y EXCESO

Artículo 90.- En caso del error previsto en el inciso c) de la fracción XI del artículo 33 sea vencible, se impondrá la cuarta parte de la sanción que corresponda al delito de que se trate.

Artículo 91.- Al que por error vencible actúe bajo la creencia errónea de que su conducta se encuentra amparada por alguna de las excluyentes del delito y responsabilidad penal previstas en las fracciones III a VI, VIII y XI del artículo 33 de este Código, se le aplicará la tercera parte de la sanción que corresponda al delito de que se trate.

La misma sanción se impondrá a quien por error vencible se exceda en alguna de las excluyentes del delito y responsabilidad penal previstas en las fracciones III a VI del artículo 33 de esta ley.

CAPÍTULO IV TENTATIVA

Artículo 92.- La punibilidad aplicable a la tentativa, salvo disposición en contrario, será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima de las sanciones previstas para el correspondiente delito doloso consumado. Para imponer la sanción, el juez competente deberá valorar el grado a que se llegó en la ejecución del delito y la magnitud del peligro producido o no evitado al bien jurídico protegido por el mismo.

En los casos de tentativa en que no fuere posible determinar el daño que se pretendió causar, cuando éste fuera determinante para la correcta adecuación de la conducta al tipo penal, se impondrá la mitad de la sanción señalada en el párrafo anterior.

CAPÍTULO V CONCURSO Y DELITO CONTINUADO

Artículo 93.- En caso de concurso real se impondrá la suma de las sanciones previstas para cada uno de los delitos cometidos, individualizadas según los términos mínimos y máximos establecidos, sin que se exceda del máximo que dispone este Código, salvo las excepciones que se establecen en el artículo 27 del mismo.

Artículo 94.- En caso de concurso ideal se aplicará la penalidad que corresponda al delito que merezca sanción mayor, misma que podrá aumentarse hasta en una mitad del máximo de su duración. Lo previsto en este párrafo no comprende los casos en que la ley dispone que, por circunstancias modificativas o calificativas, una sanción determinada deba agravarse con otra, o ésta deba imponerse sin perjuicio de aquélla.

Artículo 95.- En caso de delito continuado se aumentará la sanción en una mitad de la establecida, para cuyos efectos el juzgador tomará en cuenta el daño causado y el número de actos ejecutivos realizados, sin que se exceda del máximo que dispone este Código, salvo las excepciones que se establecen en el artículo 27 del mismo.

CAPÍTULO VI AUTORÍA INDETERMINADA

Artículo 96.- Cuando varios sujetos, sin concierto alguno, intervengan en la comisión de un delito, y no pueda precisarse el daño que cada quien produjo, la penalidad para cada uno será de las tres cuartas partes del mínimo a las tres cuartas partes del máximo de las sanciones o medidas de seguridad correspondientes para el delito cometido, según su modalidad.

CAPÍTULO VII SUSTITUCIÓN DE SANCIONES

Artículo 97.- La autoridad judicial, a petición de parte, de manera fundada y motivada, podrá sustituir la sanción de prisión, bajo las reglas establecidas en el presente Capítulo.

Las sanciones de multa, trabajo a favor de la comunidad, tratamiento en libertad y tratamiento en semilibertad de imputables podrán ser impuestas como sanciones sustitutas, bajo las reglas establecidas en el presente Capítulo.

Artículo 98.- La sustitución de la sanción de prisión se hará en los siguientes términos:

- I. Por trabajo a favor de la comunidad o tratamiento en libertad, si la sanción de prisión no excede de un año;
- II. Por multa, si la sanción de prisión no excede de dos años;
- III. Por tratamiento en semilibertad, si la sanción de prisión no excede de tres años.

Artículo 99.- Para que proceda la sustitución de la sanción de prisión, es necesario que se observen las siguientes condiciones:

- I. Que se haya reparado el daño a la víctima o al ofendido o que se otorgue garantía suficiente mediante un plan reparatorio;
- II. Que el sentenciado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso y perseguible de oficio.

Artículo 100.- Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar el importe de la multa impuesta o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo a favor de la comunidad, en razón de una jornada de trabajo por un día de salario mínimo.

Artículo 101.- La autoridad judicial podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la sanción de prisión impuesta:

- I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas, salvo que la autoridad judicial estime conveniente apercibirlo, caso en el que se fijará garantía para asegurar el cumplimiento de las condiciones;
- II. Cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso, si el nuevo delito carece de trascendencia social o es imprudencial, la autoridad judicial resolverá si debe aplicarse la sanción sustituida.

En caso de hacerse efectiva la sanción de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido la sanción sustitutiva.

Artículo 102.- Cuando el condenado o un tercero hubiesen otorgado garantía patrimonial para el cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución, la obligación de aquéllos concluirá al extinguirse la sanción impuesta. Si el condenado solicita que se le releve de la garantía otorgada sin ofrecer otra, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 103.- Cuando el tercero tenga motivos fundados para cesar en su condición de garante, los expondrá al juez a fin de que, si éste los estima justificados, prevenga al sentenciado que constituya nueva garantía dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que, si no lo hace, se ejecutará la sanción sustituida.

Artículo 104.- Cuando un tercero sea el garante, deberá comunicar al juez competente su insolvencia, así como cualquiera otra circunstancia que afecte la garantía otorgada, para el efecto de que se constituya nueva garantía o se ejecute la sanción.
En caso de muerte del garante, el sentenciado deberá informarlo al juez competente.

CAPÍTULO VIII CONDENA CONDICIONAL

Artículo 105.- La condena condicional es una facultad por la cual la autoridad judicial, al emitir sentencia, podrá suspender la ejecución de la sanción de prisión. Tiene por objeto fundamental permitir al sentenciado incorporarse a la sociedad. La condena condicional se aplicará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Campeche.

TÍTULO SEXTO EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

CAPÍTULO PRELIMINAR REGLAS GENERALES

Artículo 106.- La responsabilidad penal se extingue por cualquiera de las siguientes causas:

- I. Cumplimiento de la sanción;
- II. Reconocimiento de inocencia;
- III. Muerte del sentenciado;
- IV. Amnistía;
- V. Perdón del ofendido;
- VI. Indulto;
- VII. Prescripción;
- VIII. Supresión del tipo penal;
- IX. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos.

Artículo 107.- La extinción de la responsabilidad penal podrá decretarse de oficio o a solicitud de parte.

Artículo 108.- La extinción a que se refiere el presente Capítulo no abarca el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, ni afecta la reparación del daño, salvo cuando la extinción de ésta sea consecuencia necesaria de la causa extintiva correspondiente.

CAPÍTULO I CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN

Artículo 109.- Se extingue la responsabilidad penal por el cumplimiento de la sanción impuesta o por el cumplimiento de las sanciones por las que se hubiera sustituido.

Artículo 110.- La sanción privativa de libertad que haya sido sustituida se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la sustitución, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.

CAPÍTULO II RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA

Artículo 111.- Procede la anulación de la sanción impuesta mediante sentencia que haya causado ejecutoria, cuando se pruebe la inocencia del sentenciado en revisión, por concurrir alguno de los siguientes supuestos:

- I. Que las pruebas en las que se funde la sentencia sean declaradas falsas con posterioridad a la emisión de aquélla;
- II. Cuando después de dictada la sentencia, aparezcan documentos públicos que invaliden las pruebas en que se haya fundado aquélla;
- III. Cuando después de dictada la sentencia se demuestre por prueba indubitable que no hubo delito o que el sentenciado no tuvo participación alguna en los hechos. En este supuesto, las pruebas exculpatorias deben haber sido conocidas por el inculpado o por su defensa con posterioridad al dictado de la sentencia.

El reconocimiento de inocencia extingue la reparación del daño.

Artículo 112.- Si el sentenciado ha cumplido con la sanción impuesta y se encuentra en el supuesto que establece el artículo anterior, podrá comparecer ante la autoridad judicial competente para solicitar la nulidad de la resolución y la declaración que reconozca su inocencia.

En caso que el sentenciado haya fallecido, la facultad de solicitar el reconocimiento de inocencia corresponde a su cónyuge, concubina, concubinario, descendientes o ascendientes en línea recta sin límite de grado.

Artículo 113.- La resolución que declare la inocencia deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor circulación en el lugar de residencia del beneficiado con la resolución.

Artículo 114.- Si la sanción impuesta consistió en sanción privativa de libertad, la persona que resulte beneficiada con la resolución que reconozca su inocencia podrá solicitar el pago por indemnización de un día de salario mínimo vigente en el Estado por cada día de reclusión que hubiera sufrido. El pago de la indemnización estará a cargo del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.

CAPÍTULO III MUERTE DEL SENTENCIADO

Artículo 115.- La muerte del sentenciado extingue las sanciones y las medidas de seguridad impuestas, a excepción de la reparación del daño y del decomiso de los instrumentos y productos del delito.

CAPÍTULO IV AMNISTÍA

Artículo 116.- Se extingue la responsabilidad penal por amnistía en los términos de la ley que se dicte concediéndola y, si no lo determina, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos y respecto a todos los responsables del delito.

CAPÍTULO V PERDÓN DEL OFENDIDO

Artículo 117.- El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la responsabilidad penal respecto de los delitos que se persiguen por querrela, cuando se expresa ante la autoridad judicial competente antes de que cause ejecutoria la sentencia. El perdón del ofendido sólo beneficia al sentenciado a favor de quien se otorga. Una vez otorgado el perdón del ofendido, no podrá revocarse.

Artículo 118.- Si la sentencia ha causado ejecutoria, el ofendido deberá otorgar el perdón legal ante el Juez de Ejecución de Sanciones, quien dictará resolución que declare extinta la responsabilidad penal y pondrá en libertad al sentenciado.

Artículo 119.- Cuando sean varias las víctimas y los ofendidos, y cada una pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito, el perdón sólo surtirá efectos en relación con quien lo otorga.

En los delitos cometidos contra algún menor o discapacitado, la autoridad judicial ante quien se otorgue el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, oirá al ministerio público y al representante del menor o discapacitado, para resolver lo relativo a la eficacia del perdón otorgado.

CAPÍTULO VI INDULTO

Artículo 120.-El indulto extingue la responsabilidad penal del sentenciado cuando queden satisfechos los requisitos y se otorgue en los términos que establecen la Constitución Política del Estado del Campeche y la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Campeche.

CAPÍTULO VII PRESCRIPCIÓN

Artículo 121.- La prescripción extingue la responsabilidad penal y las sanciones. Es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley.

La prescripción producirá su efecto aunque no lo alegue en su defensa el inculpado. La autoridad investigadora o la autoridad judicial competente la declararán de oficio, en todo caso, en el momento en que tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso.

Artículo 122.- Los plazos para la prescripción de la responsabilidad penal o de la facultad para ejecutar las sanciones serán continuos, y se les aplicarán las siguientes disposiciones:

- I. Se contarán en cada caso desde el día señalado por la ley;
- II. Se aumentarán un tercio si el acusado o sentenciado permanece fuera del territorio del Estado;
- III. Se aumentarán en dos tercios si el acusado o sentenciado permanece fuera del país.

Artículo 123.- Las sanciones impuestas por sentencia que haya causado ejecutoria prescriben:

- I. En un tiempo igual a la sanción privativa o restrictiva de libertad que se haya impuesto, pero no podrá ser inferior a tres años;
- II. En cinco años cuando se trate de sanciones pecuniarias o sanciones restrictivas de otros derechos, con independencia de la reparación del daño y del decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.

Artículo 124.- Cuando el sentenciado haya cumplido parcialmente su sanción, para que opere la prescripción deberá transcurrir el tiempo que le falte para el cumplimiento total de la sanción impuesta.

Artículo 125.- Los plazos para la prescripción de las sanciones se computarán desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia dictada. Para el caso de sanciones privativas de libertad, el plazo comenzará a contarse desde el día en que el sentenciado se sustraiga de la acción de la autoridad competente.

Artículo 126.- Cuando alguna sanción deba ser cumplida con posterioridad a una sanción privativa de libertad, el plazo para la prescripción de aquélla comenzará a computarse desde la extinción de la sanción anterior.

Artículo 127.- La prescripción de la sanción privativa de libertad sólo se interrumpe con la aprehensión del sentenciado, aunque se ejecute por delito diverso, o por la solicitud formal de entrega que la autoridad judicial competente haga a la autoridad judicial competente de otra entidad federativa en la que se encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue dicha entrega o desaparezca la situación legal del detenido que motive a aplazar el cumplimiento de lo solicitado.

La prescripción de las demás sanciones se interrumpirá por cualquier acto de la autoridad judicial competente para hacerlas efectivas.

Artículo 128.- Las medidas de seguridad prescriben en un término de cinco años, a partir del día en que se hayan decretado.

CAPÍTULO VIII SUPRESIÓN DEL TIPO PENAL

Artículo 129.- Cuando la ley suprima un tipo penal se extinguirá la pretensión punitiva respectiva o la de ejecutar las sanciones o medidas de seguridad impuestas, se pondrá en absoluta e inmediata libertad al imputado o al sentenciado y cesarán de derecho todos los efectos del procedimiento penal o de la sentencia.

CAPÍTULO IX EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ANTERIOR DICTADA EN PROCESO SEGUIDO POR LOS MISMOS HECHOS

Artículo 130.- Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio anterior se le absuelva o se le condene.

Cuando existan en contra de la misma persona y por la misma conducta:

- I. Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá de oficio el que se haya iniciado en segundo término;
- II. Una sentencia y un procedimiento distinto, se archivará o se sobreseerá de oficio el procedimiento distinto; o
- III. Dos sentencias dictadas en procesos distintos, se hará la declaratoria de nulidad de la sentencia que corresponda al proceso que se inició en segundo término y se extinguirán sus efectos.

LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS Y SUS SANCIONES

TÍTULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL

CAPÍTULO I HOMICIDIO

Artículo 131.- Comete el delito de homicidio quien prive de la vida a otra persona. Se entenderá como pérdida de la vida lo dispuesto por la Ley General de Salud. Al responsable de

homicidio doloso que no tenga señalada una sanción específica en este Capítulo se le impondrán de diez a veinte años de prisión.

Artículo 132.- Se tendrá como mortal una lesión cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión.

Artículo 133.- A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, pariente consanguíneo colateral hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario, pareja, expareja, con conocimiento de esa relación, se le impondrán de quince a treinta años de prisión y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En este caso, si concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 143 de este Código, se impondrán de treinta a cincuenta años de prisión, salvo que se trate de riña.

Artículo 134.- A quien cometa homicidio calificado se le impondrán de veinticinco a cincuenta años de prisión.

Artículo 135.- A quien prive de la vida a otro en riña se le impondrán de cinco a diez años de prisión, si se tratare del provocador y de tres a siete años, si se tratare del provocado.

CAPÍTULO II LESIONES

Artículo 136.- Comete el delito de lesiones quien cause a otro un daño o alteración en su salud. Por la comisión de este delito se impondrán:

- I. De seis a cuarenta y ocho jornadas de trabajo a favor de la comunidad o multa de diez a veinticinco días de salario, si las lesiones tardan en sanar menos de quince días;
- II. De un mes a un año de tratamiento en semilibertad y multa de treinta a doscientos días de salario, cuando tarden en sanar más de quince y menos de sesenta días;
- III. De seis meses a dos años de prisión, si tardan en sanar más de sesenta días;
- IV. De uno a tres años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente notable en la cara;
- V. De tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro;
- VI. De tres a siete años de prisión, si producen la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una enfermedad incurable o una deformidad incorregible;
- VII. De cuatro a ocho años de prisión, cuando pongan en peligro la vida.

Artículo 137.- A quien cause lesiones a un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, pariente consanguíneo colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, pareja, ex pareja, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa

relación, se le aumentará en una tercera parte la sanción que corresponda, según las lesiones inferidas. Si es reincidente, se aumentará en dos terceras partes la sanción que corresponda.

Artículo 138.- Cuando las lesiones se infieran a un menor de edad o a un incapaz, sujetos a la patria potestad, tutela o custodia del agente, las sanciones que correspondan se aumentarán en dos terceras partes.

En ambos casos, a juicio de la autoridad judicial, se decretará la suspensión de los derechos que tenga el sujeto activo en relación con el sujeto pasivo, por un tiempo igual al de la sanción de prisión que se imponga. Asimismo, la autoridad judicial podrá decretar la pérdida de estos derechos.

Artículo 139.- A quien infiera a otro lesiones en riña, se le impondrán dos terceras partes de las sanciones que correspondan por las lesiones causadas, si se trata del provocador, y la mitad si se trata del provocado.

Artículo 140.- Cuando las lesiones sean calificadas, la sanción correspondiente a las lesiones simples se aumentará en una mitad.

CAPÍTULO III REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES

Artículo 141.- Al que en estado de emoción violenta cometa homicidio o inflinja lesiones, se le impondrá una tercera parte de las sanciones que correspondan por su comisión. El estado de emoción violenta consiste en una reacción motora, circulatoria y secretoria hacia un sentimiento de gran intensidad, el cual produce una perturbación psicológica transitoria que se manifiesta a través de formas violentas de expresión, falta de razonamiento, de discernimiento y de voluntad y, como consecuencia, se atenúa la imputabilidad del agente.

Artículo 142.- Para efectos de este Código, la riña es el enfrentamiento entre dos o más personas con el propósito de causarse daño físico.

Artículo 143.- El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con premeditación; ventaja; traición; alevosía; retribución; por el medio empleado; saña; en perjuicio de menor de edad; o cuando dolosamente se cometan en perjuicio de agentes policiales, así como de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, si se encuentran en el ejercicio de sus funciones y con motivo de las mismas, siempre que se cumplan con arreglo a la ley. También serán lesiones calificadas cuando se cometan en perjuicio de mujer. Para efectos de aplicar esta disposición se atenderá a lo siguiente:

I. Existe premeditación cuando se ejecuta la conducta después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer;

II. Existe ventaja:

a) Cuando el agente es superior en fuerza física a la víctima y ésta no se halla armada;

- b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él;
 - c) Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa de la víctima;
 - d) Cuando la víctima se halla inerme o caída y el agente armado o de pie. La ventaja no se tomará en consideración si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia.
- III. Existe traición cuando el agente realiza el hecho y quebranta la confianza o seguridad que expresamente le había prometido a la víctima, o las mismas que en forma tácita debía ésta esperar de aquél por las relaciones de confianza real y actual que existen entre ambos;
- IV. Existe alevosía cuando el agente realiza el hecho y sorprende intencionalmente a alguien de improviso, o emplea asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer;
- V. Existe retribución cuando el agente lo cometa por pago o prestación prometida o dada;
- VI. Por el medio empleado, cuando se cause por inundación, incendio, explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tortura o por medio de cualquier sustancia nociva para la salud;
- VII. Existe saña cuando se aumenta deliberadamente el dolor de la víctima.

Artículo 144.- Cuando en el momento de la privación de la vida, o posterior a ello, se realice la decapitación, mutilación, quemaduras o descuartizamiento de la víctima, o se utilicen mensajes intimidatorios dirigidos a la población por la exhibición del motivo de la muerte, las sanciones que correspondan por la comisión del delito de homicidio se aumentarán en una mitad.

Artículo 145.- Cuando el homicidio se cometa imprudencialmente con motivo del tránsito de vehículos se impondrán de 5 a 15 años de prisión, si se actualiza alguno de los siguientes supuestos:

I. Cuando el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares; o

II. Cuando el agente no auxilie a la víctima del delito y se dé a la fuga.

Cuando se causen lesiones imprudencialmente bajo los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se aplicará la mitad de las sanciones asignadas por la ley al delito doloso. No se impondrá sanción alguna a quien por culpa o imprudencia ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo, afines o civiles, hermanos por consanguinidad o civiles, cónyuge, concubina, concubinario o cuando entre el agente y el pasivo exista relación de pareja permanente, salvo que el sujeto activo se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalantes u otros que produzcan efectos similares, sin que medie prescripción médica.

Se suspenderá al agente el derecho a conducir vehículos automotores por un tiempo igual a la sanción de prisión que corresponda.

Artículo 146.- Cuando se causen lesiones a dos o más personas de las previstas en las fracciones VI y VII del artículo 136 de este Código, y se trate de vehículos de pasajeros, carga, servicio público o servicio al público o de transporte escolar, o servicio de transporte de personal de alguna institución o empresa, y el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo

el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, se aumentará la sanción en dos tercios.

Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito, por un lapso igual al de la sanción de prisión que se le imponga; si es servidor público, también se impondrá inhabilitación por el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.

Artículo 147.- Cuando por imprudencia se cause homicidio de dos o más personas, en las circunstancias previstas en el artículo anterior, se aumentarán en dos terceras partes las sanciones previstas en el artículo 87 y se suspenderán los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un período igual al de la sanción de prisión impuesta; si es servidor público, además se impondrán destitución e inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.

Artículo 148.- En todos los casos de homicidio, además de la sanción señalada para cada uno de los tipos penales, se deberá imponer por la autoridad judicial un tratamiento psicológico o psiquiátrico al sujeto activo del delito el cual tendrá la duración que dicha autoridad disponga, sin que exceda del tiempo establecido para la sanción de prisión y sin perjuicio de la aplicación de otros tratamientos.

CAPÍTULO IV OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO

Artículo 149.- A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma y tenga la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Si el sujeto activo fuese médico o profesionista similar o auxiliar, también se le suspenderá en el ejercicio de su profesión hasta por un término igual al de la sanción de prisión.

Las mismas sanciones se aplicarán a quien, cuando se encuentre a cargo de un establecimiento asistencial, público o privado, realice la conducta descrita en el párrafo anterior.

Artículo 150.- A quien después de lesionar a una persona, imprudencial o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere cuando pueda hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta a trescientos días de salario, independientemente de la sanción que proceda por el o los delitos cometidos. Si la víctima fuere menor de edad, discapacitado, adulto mayor de setenta años o mujer embarazada, la sanción se aumentará en dos terceras partes.

Artículo 151.- A quien exponga en una institución o ante cualquier otra persona a un incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y pérdida de los derechos de familia y sucesorios que pudieran corresponderle con respecto a la víctima.

CAPÍTULO V AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO

Artículo 152.- A quien induzca a otro para que se prive de la vida, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, si el suicidio se consuma. A quien ayude a otro para que se prive de la vida se le impondrá prisión de tres a ocho años, si el suicidio se consuma.

Si el suicidio no se consuma por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, la sanción será de una cuarta parte de las señaladas.

Si el suicidio no se consuma por causas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero sí se causan lesiones, se impondrán las dos terceras partes de la sanción que corresponda por inducir o ayudar al suicidio, sin que exceda de la sanción por lesiones de que se trate.

Si el agente prestare el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la sanción aplicable será de cinco a diez años de prisión.

Artículo 153.- Si la persona a quien se induce o ayuda al suicidio fuese menor de edad o no tuviere capacidad de comprender la relevancia de su conducta, se impondrá al ayudante o inductor las sanciones señaladas al homicidio doloso o lesiones calificadas, según corresponda.

Artículo 154.- En todos los casos del presente Capítulo, si el agente y la víctima tuvieran parentesco ascendente o descendente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, pariente consanguíneo colateral hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario, pareja, ex pareja, con conocimiento de esa relación, a juicio de la autoridad judicial, se podrá decretar la suspensión o pérdida de los derechos de familia y hereditarios.

CAPÍTULO VI ABORTO

Artículo 155.- Aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de su desarrollo. Se entiende por embarazo, al período que transcurre entre la implantación en el endometrio del óvulo fecundado y el momento del parto.

Se impondrán de veinticuatro a setenta y dos jornadas de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto antes de las doce semanas de embarazo. La misma sanción se impondrá al que induzca a una mujer a abortar o al que participe en un aborto o lo ejecute, con consentimiento de la mujer, sea cual fuere el medio que empleare, antes de las doce semanas de embarazo.

Artículo 156.- Se impondrán de seis meses a dos años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto, después de las doce semanas de embarazo.

La misma sanción se impondrá al que induzca a una mujer a abortar o al que participe en un aborto o lo ejecute, con consentimiento de la mujer, sea cual fuere el medio que empleare, después de las doce semanas de embarazo.

Para efectos del presente artículo y del artículo anterior, sólo se sancionará el delito cuando el aborto se haya consumado.

Artículo 157.- Al que obligue a abortar a una mujer, por cualquier medio, se le impondrán de cuatro a siete años de prisión. A quien participe en un aborto o ejecute el mismo, sin consentimiento de la mujer, se le impondrán de tres a seis años de prisión. En este último caso, si mediare violencia física o psicológica, se impondrá al agente de cinco a ocho años de prisión.

Para efectos del presente artículo, si el aborto no se consumare por causas ajenas a la voluntad del agente, se impondrá una tercera parte de las sanciones previstas en cada caso.

Artículo 158.- Si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrona o partero, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a los artículos anteriores, se le suspenderá por un tiempo igual al de la sanción impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio.

Artículo 159.- Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto:

- I. Cuando sea el resultado de una conducta imprudencial de la mujer embarazada;
- II. Cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que se practique dentro de las primeras doce semanas de embarazo;
- III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, quien deberá oír previamente el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

En el caso de la fracción II de este artículo, bastará con los dictámenes médico y psicológico que determinen la existencia de una violación, avalados por el ministerio público, para que se actualice la excluyente de responsabilidad.

En los casos de las fracciones II y III del presente artículo, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

CAPÍTULO VII FEMINICIDIO

Artículo 160.- Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
- III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

- IV. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
- V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
- VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

El delito de feminicidio se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

TÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL
CAPÍTULO I
VIOLACIÓN

Artículo 161.- Al que realice cópula con persona de cualquier sexo, sin consentimiento de ésta, se le impondrán de cinco a doce años de prisión y multa de trescientos a quinientos días de salario.

Para los efectos de este Capítulo, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal o bucal.

Se sancionará con la misma penalidad al que, sin consentimiento y de forma lasciva o lesiva, introduzca en una persona cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo humano distinta al pene, por vía vaginal o anal.

Si entre el activo y el pasivo de la violación existe vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja de hecho, se impondrá la mitad de las sanciones señaladas en este artículo. En este último caso, el delito se perseguirá por querrela de parte.

Artículo 162.- Al que realice cópula o la introducción de forma lasciva o lesiva de cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo humano distinta al pene, por vía vaginal o anal, en persona menor de catorce años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, se le impondrán de ocho a quince años de prisión y multa de quinientos a setecientos días de salario.

Artículo 163.- Las sanciones que señalan los artículos 161 y 162 se aumentarán en un tercio cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- I. Se cometa en persona con enfermedad o situación física que origine no poder resistirla;
- II. Se cometa cuando se aprovechen los medios o circunstancias del empleo, cargo, comisión, profesión, arte u oficio que se ejerza. En este caso, además de la sanción privativa de libertad, el sentenciado, será destituido del empleo, cargo o comisión, en su caso, o suspendido en el ejercicio de su profesión u oficio por un período igual al de la sanción de prisión impuesta;
- III. Ocurre en un centro de reinserción, internamiento o separo de alguna institución de seguridad pública;

- IV. Sea cometido por un pariente de la víctima, sin limitación de grado en línea recta ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado en línea colateral; por el padrastro o madrastra en contra del hijastro o hijastra, por la pareja o por la persona que vive en concubinato con el padre o la madre de la víctima. En estos casos, el culpable perderá además todos los derechos familiares y sucesorios que le puedan corresponder por su vínculo con la víctima;
- V. Sea cometido por persona que tenga a la víctima bajo su custodia, tutela, guarda o educación, o que aproveche la confianza en ella depositada; y
- VI. Sea cometido por agente que ejerciere autoridad sobre la víctima o se trate de un ministro de culto religioso o por quien se ostente como tal.

Cuando la violación se cometa con intervención directa o inmediata de dos o más personas, las sanciones estipuladas en este capítulo se aumentarán en una cuarta parte.

CAPÍTULO II ESTUPRO

Artículo 164.- Comete el delito de estupro el que realice cópula con el consentimiento de persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, independientemente de su sexo. Al que cometa el delito de estupro se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario.

Cuando se obtenga el consentimiento a través de cualquier tipo de engaño, se aumentarán las sanciones en un tercio.

Artículo 165.- Si se comprueba que la cópula se realizó con consentimiento en virtud de la existencia de algún tipo de vínculo emocional o su equiparable, sin que medie ningún tipo de engaño, las sanciones se reducirán en una mitad.

Artículo 166.- En caso de estupro, la acción penal se extinguirá si el sujeto activo y el pasivo contraen matrimonio de conformidad con la ley en la materia, siempre y cuando expresen de manera voluntaria su deseo de unirse en vínculo matrimonial, sin que medie algún tipo de vicio de la voluntad.

Este delito se perseguirá por querrela de parte.

CAPÍTULO III ASEDIO SEXUAL

Artículo 167.- Al que con fines sexuales asedie a una persona, a pesar de su oposición manifiesta, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario.

Para los efectos de este Código, se entiende por asedio el importunar a alguien reiteradamente con pretensiones.

Cuando el asedio lo realice el agente valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes o cualquier otra que implique una relación de subordinación, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario. Si el asediador fuese servidor público y utilice los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la sanción prevista en el párrafo anterior se le destituirá de su cargo. El delito previsto en este artículo será perseguido por querrela de parte.

CAPÍTULO IV ABUSO SEXUAL

Artículo 168.- A quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la obligue a ejecutar un acto con fines sexuales o lascivos sin llegar a la cópula o a observar cualquier acto sexual o de lascivia, se le impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario.

Artículo 169.- En el caso del artículo anterior, se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario en cualquiera de los siguientes casos:

I.- Se hiciera uso de violencia física o psicológica;

II.- Sea cometido por dos o más personas;

III.- Si existe relación de autoridad, de parentesco o de amistad, entre el agente y la víctima o aquél aproveche para su comisión los medios o circunstancias del empleo, cargo o comisión, profesión u oficio que ejerza, o sea ministro de algún culto o se haya ostentado como tal. Además, en su caso, a juicio de la autoridad judicial, se le impondrá al agente suspensión, destitución e inhabilitación del empleo, cargo o comisión, profesión u oficio, por un tiempo igual al de la sanción de prisión;

IV.- Se hubiera administrado a la víctima alguna sustancia tóxica que afecte su comportamiento.

Este delito se perseguirá por querrela de parte.

CAPÍTULO V DISPOSICIÓN COMÚN

Artículo 170.- En todos los casos del presente Título, además de la sanción señalada para cada uno de los tipos penales, se aplicará un tratamiento psicológico o psiquiátrico al sujeto activo del delito y tendrá la duración que la autoridad judicial disponga, sin exceder el tiempo de la sanción de prisión y sin perjuicio de la aplicación de otros tratamientos.

TÍTULO TERCERO DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO I AMENAZAS

Artículo 171.- A quien intimide a otro con causarle daño en su persona o en sus bienes, se le impondrán de un mes a un año de prisión y multa de veinte a cien días de salario, sin perjuicio de la sanción aplicable si el agente realiza el mal con el que amenaza.
En este caso, el delito será perseguible por querrela de parte.

Artículo 172.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario a quien, por cualquier forma, ya sea escrita, oral, electrónica o medio de comunicación, informe a un servidor público o particular, a sabiendas de su falsedad, la existencia de explosivos, sustancias tóxicas, biológicas, incendiarias o de cualquier otro medio capaz de causar daños en instalaciones públicas o privadas, que produzcan alarma, temor o terror a las personas que se encuentren en su interior, perturben la paz pública o suspendan un servicio.

CAPÍTULO II ALLANAMIENTO DE MORADA O DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO O PRIVADO

Artículo 173.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de veinte a ciento veinte días de salario al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permite, se introduzca furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de un lugar habitado o destinado a habitación.

Artículo 174.- Las mismas sanciones del artículo anterior se impondrán al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permite, se introduzca furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, en algún establecimiento o espacio público o privado mientras se encuentre cerrado.

CAPÍTULO III VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL

Artículo 175.- Sin perjuicio de las sanciones que se impongan por la comisión de otros delitos, se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario a quien, sin consentimiento del otro o sin autorización judicial, en su caso, y para conocer asuntos relacionados con la intimidad de aquél:

- I. Se apodere de documentos u objetos de cualquier clase;
- II. Reproduzca, circule o publique, por cualquier medio, dichos documentos u objetos;
- III. Utilice medios técnicos para escuchar u observar, transmitir, grabar o reproducir la imagen o el sonido en espacios privados.

Este delito se perseguirá por querrela de parte.

CAPÍTULO IV TORTURA

Artículo 176.- Comete el delito de tortura el servidor público, del Estado o de los municipios, que en el ejercicio de sus funciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos o la coacción física o moralmente con el fin de:

- I. Obtener de ella, o de un tercero, información o una confesión;
- II. Inducirla a un comportamiento determinado;
- III. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido.

No se considerarán como tortura las sanciones o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean estrictamente inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Artículo 177.- Al que cometa el delito de tortura se le impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario, destitución de su cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la sanción de prisión.

Artículo 178.- Las sanciones previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, y conforme a lo dispuesto por el artículo 176 de este Código, instigue, compela o autorice a un tercero para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Artículo 179.- Si además de tortura resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso de delitos.

No se justificará la tortura porque se invoquen o existan circunstancias excepcionales, como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquiera otra emergencia.

En el momento en que se denuncie un caso de tortura o que lo solicite cualquier detenido, procesado o condenado, se aplicará el dictamen médico-psicológico para casos de posible tortura.

Ninguna declaración que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba.

Artículo 180.- Se impondrá multa de doscientos a cuatrocientos días de salario al servidor público que conozca de un hecho de tortura y no lo denuncie de inmediato.

CAPÍTULO V DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

Artículo 181.- Al agente estatal que, con motivo de sus atribuciones, prive de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales procedentes, se le impondrán de diez a veinte años de prisión.

Para los efectos del presente Capítulo se considera agente estatal a cualquiera de los servidores públicos señalados en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de

Campeche, así como aquella persona que actúe con el apoyo, autorización o aquiescencia de un agente estatal.

Se impondrán dos terceras partes de la sanción, cuando el sujeto activo suministre información que permita esclarecer los hechos, y una mitad de la sanción, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

TÍTULO CUARTO DELITOS CONTRA LA INVIOABILIDAD DEL SECRETO

CAPÍTULO ÚNICO REVELACIÓN DE SECRETOS

Artículo 182.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que sin causa justa, en perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que se le haya confiado para su guarda o para revelarlo o entregarlo a persona determinada.

En este caso, este delito será perseguido por querrela de parte.

Artículo 183.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de ciento sesenta a doscientos cuarenta días de salario, a quien revele, divulgue o utilice indebidamente, o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada sin autorización legal.

TÍTULO QUINTO DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

CAPÍTULO I ROBO

Artículo 184.- Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Este delito se sancionará en los términos siguientes:

- I. Cuando el monto de lo robado no exceda de cien veces el salario mínimo diario general aplicable en el Estado, de doce a setenta y dos jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa que podrá ascender hasta el valor de lo robado;
- II. Cuando el monto de lo robado exceda de cien pero no de trescientos salarios mínimos, de tres meses a un año de tratamiento en semilibertad y multa de cincuenta a cien días de salario;
- III. Cuando el monto de lo robado exceda de trescientos pero no de seiscientos salarios mínimos, de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días de salario;

- IV. Cuando el monto de lo robado exceda de seiscientos pero no de mil salarios mínimos, de dos a cuatro años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario;
- V. Cuando el monto de lo robado exceda de mil salarios mínimos, de tres a siete años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario.

Artículo 185.- Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tenga en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella. Para efectos de la aplicación de la sanción, se tomará en consideración el monto del salario mínimo que corresponda al momento de la ejecución del delito.

Artículo 186.- Para estimar la cuantía del robo se atenderá al monto comercial de la cosa, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o si por su naturaleza no fuere posible fijar su monto, se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario.

Artículo 187.- Se equipara al robo y se sancionará como tal:

- I. La disposición o apoderamiento de una cosa mueble, ejecutada dolosamente por su dueño, si la cosa se encuentra en poder de otro a título de prenda o de depósito decretado por una autoridad judicial o hecho con su intervención, o mediante contrato público o privado;
- II. El aprovechamiento de algún fluido, líneas de televisión por cable, telefónicas y de internet, sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer y autorizar aquel;
- III. El hecho de encontrarse una cosa perdida y no entregarla a su dueño a sabiendas de quién es.

Artículo 188.- Si el robo se ejecuta con violencia, a la sanción que corresponda por el robo simple se le aumentarán de uno a cuatro años de prisión. Si el robo con violencia se efectúa por dos o más personas, la sanción anterior se aumentará en un cuarto. Si la violencia constituye otro hecho delictivo, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

Artículo 189.- Se entiende por violencia física en el robo la fuerza material que para cometerlo se ejerza sobre una persona. Hay violencia psicológica en el robo cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con inferirle un mal grave, presente e inmediato, capaz de intimidarla.

Artículo 190.- Para la imposición de la sanción también se tendrá el robo como hecho con violencia:

- I. Cuando se ejerza en una persona distinta de la robada que se halle en compañía de ésta;
- II. Cuando el ladrón ejerza la violencia después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado.

Artículo 191.- No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodere una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.

Artículo 192.- Al que se le impute haber robado una cosa y acredite haberla tomado con carácter temporal y no para apropiársela o venderla, que no exceda su valor de trescientos salarios mínimos, se le impondrán de seis a treinta y seis jornadas de trabajo a favor de la comunidad, siempre que justifique no haberse negado a devolverla si fue requerido para ello. Además pagará a la víctima u ofendido, como reparación del daño, el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada. Si esta no se halla invertida o sujeta a alquiler o arrendamiento, la reparación se estimará conforme a los valores del mercado.

Artículo 193.- A la sanción que le corresponda al agente por la comisión del delito de robo simple se le aumentarán de seis meses a dos años de prisión, en los casos siguientes:

- I. Cuando se realice aprovechando alguna relación de trabajo, servicio u hospitalidad;
- II. Cuando se cometa por un servidor público que actúe en ejercicio y con motivo de sus funciones;
- III. Cuando se aproveche la consternación que una desgracia privada cause a la víctima o a su familia o las condiciones de confusión que se produzcan por catástrofe o desorden público;
- IV. Cuando se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudatoria u otra en que se conserven caudales o en contra de las personas que los custodien o transporten;
- V. Cuando lo robado sean partes de vehículos estacionados en la vía pública o en otro lugar destinado a su guarda o reparación, así como de objetos guardados en su interior;
- VI. Cuando se cometa sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier lugar durante el transcurso del viaje;
- VII. Cuando lo robado se trate de algún expediente o documento de protocolo notarial, oficina o archivos públicos, de documentos que contengan obligación, liberación o transmisión de deberes que obren en expediente judicial, con afectación de alguna función pública. Si el delito lo comete el servidor público de la oficina en que se encuentre el expediente o documento, se le impondrá además la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por un término de seis meses a tres años;
- VIII. Cuando recaiga sobre bienes de instituciones educativas, culturales o científicas;
- IX. Cuando recaiga sobre equipo, instrumentos, semillas, frutos cosechados o por cosechar, o cualesquiera otros artículos destinados al aprovechamiento agrícola, forestal o frutícola, cometido en la huerta, parcela, heredad, sembradío, invernadero o en cualquier otro lugar, dentro del inmueble en que se realice la actividad agrícola, forestal o frutícola;
- X. Cuando recaiga sobre materiales destinados a la prestación de un servicio público;
- XI. Cuando para cometerlo, el agente se valga de identificaciones falsas o supuestas órdenes de alguna autoridad.

Artículo 194.- La sanción que conforme a este Código deba imponerse por la comisión del delito de robo simple, se aumentará de uno a tres años de prisión cuando se cometa en edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o inhabitados pero destinados para habitación o en lugar cerrado. Comprende esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén contruidos. En los mismos términos se sancionará al que se apodere de un vehículo estacionado y no ocupado por persona alguna.

Artículo 195.- En todo caso de robo, la autoridad judicial podrá suspender al delincuente por un tiempo igual al de la sanción de prisión impuesta, en el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en concursos o quiebras, asesor o representante de ausentes y en el ejercicio de cualquier profesión de las que exijan título.

CAPÍTULO II ABIGEATO

Artículo 196.- Comete el delito de abigeato el que se apodere, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellos, e independientemente del lugar en que se encuentren, de uno o más semovientes de cualquier especie ganadera, formen o no hato, o de una o más colonias de abejas en un apiario.

Para efectos de este capítulo, una colonia es un conjunto de abejas que interactúan intercambiando alimentos y otras sustancias necesarias para su vida y llevando a cabo diferentes actividades; viven en una colmena y está compuesta por una abeja reina, zánganos y obreras.

Este delito se sancionará de la forma siguiente:

- I. Con prisión de seis meses a dos años y multa de cien a trescientos días de salario, cuando se cometa en una o dos piezas de ganado;
- II. Con prisión de dos a cinco años y multa de trescientos a seiscientos días de salario, cuando se cometa en tres o más piezas de ganado;
- III. Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario, cuando el apoderamiento sea, total o parcialmente, de una colonia de abejas perteneciente a un apiario;
- IV. Con prisión de uno a tres años y multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario, cuando el apoderamiento sea, total o parcialmente, de dos o más colonias de abejas pertenecientes a un apiario.

Las sanciones anteriores se aumentarán en una tercera parte cuando el abigeato lo cometan los encargados de la custodia, vigilancia o traslado del ganado o colonias de abejas.

Artículo 197.- Se impondrá una mitad de las sanciones que señala el artículo anterior a los que adquieran ganado o colonias de abejas robados, a sabiendas de su origen ilícito.

Artículo 198.- Al servidor público que intervenga en la legalización de los documentos que acrediten la propiedad del semoviente o colonia de abejas, o al encargado del rastro o lugar

destinado a este fin, si no toma las medidas indispensables para cerciorarse de la procedencia legítima del mismo, se le impondrán de veinticuatro a setenta y ocho jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario y destitución del empleo, cargo o comisión.

Artículo 199.- Al que ampare con documentos una o más cabezas de ganado robado o una o más colonias de abejas, a sabiendas de su origen ilícito, se le impondrán de un mes a un año de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario. Igual sanción se aplicará al que transporte ganado o sus pieles, carnes u otros derivados, o colonias de abejas o productos derivados de estas colonias, a sabiendas de que se trata de ganado o colonias de abejas robados.

Artículo 200.- Al que lucre con pieles, carnes u otros derivados obtenidos del abigeato sin haber tomado las medidas necesarias para cerciorarse de su legal procedencia, se le impondrá multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario.

Artículo 201.- Al que altere o elimine las marcas o señales, marque, señale, contramarque o contraseñale ganado ajeno, sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se le impondrá de un mes a un año de prisión o multa de cien a trescientos días de salario.

Artículo 202.- Si el apoderamiento a que se refiere este Capítulo se verifica con violencia, o por la noche, o por dos o más individuos o con horadación de paredes, fractura de puertas o destrucción de las cerraduras de éstas o ruptura de cercas, setos o vallados, las sanciones que correspondan se aumentarán en un tercio.

Artículo 203.- Siempre serán considerados como instrumentos del delito de abigeato las cabalgaduras de que se sirvan los abigeos para arrear el ganado y los vehículos en que se realice el transporte de ganado o sus productos o de colonias de abejas o sus productos, así como los demás objetos que sirvan para su comisión.

CAPÍTULO III ABUSO DE CONFIANZA

Artículo 204.- Comete el delito de abuso de confianza el que con perjuicio de alguien disponga, para sí o para otro, de una cosa ajena mueble de la cual se le haya transmitido la posesión, pero no el dominio. Se le impondrán:

- I. De seis a cuarenta y ocho jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de diez a cincuenta días de salario, si el monto del abuso no excede de cien veces el salario mínimo;
- II. De un mes a un año de tratamiento en libertad o multa de cincuenta a cien días de salario, si el monto del abuso excede de cien, pero no de trescientas veces el salario mínimo;

- III. De tres meses a un año de tratamiento en semilibertad y multa de cien a doscientos días de salario, si excede de trescientas, pero no de seiscientas veces el salario mínimo;
- IV. De tres meses a un año de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, si excede de seiscientas, pero no de un mil veces el salario mínimo;
- V. De uno a tres años de prisión y multa de cuatrocientos a ochocientos días de salario, si excede de mil veces el salario mínimo.

Este delito será perseguido por querrela de parte.

Artículo 205.- Se impondrán las sanciones previstas en el artículo anterior:

- I. Al propietario o poseedor de una cosa mueble que, aunque no tenga la libre disposición sobre la misma en virtud de cualquier título legítimo a favor de tercero, disponga de ella con perjuicio del tercero legitimado;
- II. Disponga de o sustraiga una cosa de su propiedad, si le ha sido embargada y la tiene en su poder con el carácter de depositario judicial, o bien, si la hubiere dado en prenda y la conserve en su poder como depositario sujeto a un contrato celebrado con alguna persona física o moral, en perjuicio de ésta;
- III. Al que tenga el carácter de depositario judicial y disponga de o sustraiga, para sí o para otro, la cosa objeto del depósito;
- IV. Al que reciba mercancía con subsidio o franquicia para darles un destino determinado, y la distraiga de ese destino o desvirtúe en cualquier forma los fines perseguidos con el subsidio o la franquicia;
- V. Al gerente, directivo, administrador, mandatario o intermediario de personas morales, o constructor o vendedor que reciba dinero, títulos o valores por el importe total o parcial del precio de alguna compraventa de inmuebles o para constituir un gravamen real sobre éstos y no los destine en todo o en parte al objeto de la operación concertada y disponga de ellos en provecho propio o de tercero.

CAPÍTULO IV FRAUDE

Artículo 206.- Comete el delito de fraude el que engañe a una persona, o se aproveche del error en que ésta se encuentra, para obtener ilícitamente alguna cosa o alcanzar un lucro indebido, en beneficio propio o de un tercero. Al agente se le impondrán:

- I. De cincuenta a cien jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días de salario, cuando el monto de lo defraudado no exceda de cien veces el salario mínimo diario general aplicable en el Estado;
- II. De tres meses a un año de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, cuando exceda de cien, pero no de quinientas veces el salario mínimo;
- III. De uno a tres años de prisión y multa de cuatrocientos a seiscientos días de salario, cuando exceda de quinientas, pero no de mil veces el salario mínimo;
- IV. De tres a seis años de prisión y multa de seiscientos a ochocientos días de salario, cuando exceda de mil, pero no de dos mil veces el salario mínimo;

- V. De cuatro a diez años de prisión y multa de ochocientos a mil doscientos días de salario cuando exceda de dos mil veces el salario mínimo;
- VI. De uno a cinco años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días de salario cuando no sea posible determinar el monto o valor de lo defraudado.

Cuando el delito se cometa en contra de tres o más personas, se aumentará la sanción hasta en una mitad.

En el supuesto de la fracción I, el delito será perseguido por querrela de parte.

Artículo 207.- Se impondrán las sanciones previstas en el artículo anterior a quien:

- I. Por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho a disponer de ella, la arrende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente, o disponga de una cosa propia como libre, con el conocimiento de que está gravada;
- II. Por cualquier medio, cuando tenga a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de éstos, altere las cuentas o condiciones de los contratos, haga aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagere los reales, oculte o retenga valores o los use indebidamente o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero;
- III. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro como consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de otro de un documento nominativo, a la orden o al portador, contra una persona supuesta, o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo;
- IV. Venda a dos personas una misma cosa, sea mueble o inmueble, y reciba el precio de la primera o de la segunda enajenación, o de ambas, parte del precio o cualquier otro lucro, con perjuicio del primero o del segundo comprador;
- V. Para hacerse del importe del depósito realizado por garantía económica del imputado, o de parte del mismo, cuando no le corresponda, haga aparecer dicho depósito como de su propiedad;
- VI. Realice un acto jurídico, contrato o acto judicial, simulado en perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido;
- VII. Siendo fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra, emplee en ésta materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las ofrecidas, si ha recibido el precio convenido o parte de él, o no realice las obras que amparen la cantidad pagada;
- VIII. Provoque deliberadamente cualquier acontecimiento y simule que se trata de caso fortuito o fuerza mayor, para liberarse de obligaciones o cobrar fianzas o seguros;
- IX. Reciba dinero, valores o cualquier otra cosa mediante el ofrecimiento de encargarse de la defensa penal de una persona, o de la dirección o patrocinio de un asunto civil, administrativo, o de cualquier otra rama de derecho, y no realice lo ofrecido, sea porque no se haga cargo legalmente de la defensa o de la dirección o patrocinio, o porque renuncie a ella o la abandone sin causa justificada;

- X. Por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por cualquier otro medio, se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la mercancía u objeto ofrecido;
- XI. Por medio de evocación de espíritus, de adivinaciones o de curaciones esotéricas explote las preocupaciones, la credulidad, la superstición o la ignorancia de las personas;
- XII. Por medio de tarjetas, títulos o documentos falsos relacionados con instituciones bancarias o comerciales, o bien, auténticos, pero sin autorización de quien está facultado para ello, haga el pago de cualquier bien o servicio u obtenga dinero en efectivo para sí o para otro. Si el sujeto activo es empleado o dependiente de la víctima u ofendido, las sanciones aumentarán en una mitad;
- XIII. Con ánimo de lucro, por sí o por interpósita persona, cause perjuicio a otro al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, cualquiera que sea su régimen de propiedad, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes. Para los efectos penales se entiende por fraccionar la división de terrenos en lotes;
- XIV. Alcance un lucro indebido para sí o para otro valiéndose de alguna manipulación informática, alteración de programas sistematizados, o del empleo no autorizado de datos, o engaño semejante.

CAPÍTULO V USURA

Artículo 208.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de doscientos a un mil días de salario a quien obtenga para sí o para otro, en virtud de recibir títulos de crédito, documentos a la orden, o celebrar convenios o contratos de manera formal o informal, ganancias notoriamente superiores a las usuales en el mercado o a las tasas de interés bancario autorizadas, por concepto de intereses u otras ventajas pecuniarias.

Se considerarán ganancias notoriamente superiores a las usuales en el mercado, las que excedan al interés bancario más alto vigente el día en que se celebre la operación.

Este delito será perseguido por querrela de parte.

CAPÍTULO VI EXTORSIÓN

Artículo 209.- Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de doscientos a ochocientos días de salario, al que, con ánimo de lucro, por cualquier medio, obligare a otro, con intimidación o engaño, a dar, tolerar algo, realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

Artículo 210.- Las sanciones previstas en el artículo anterior se aumentarán en una mitad cuando en la comisión del delito:

- I. Intervenga una o más personas armadas o porten instrumentos peligrosos;

- II. Se cometa con violencia;
- III. Se cometa por vía telefónica o cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos;
- IV. El sujeto activo del delito de extorsión se encuentre en reclusorio o centro de reinserción social;
- V. Se cometa por servidor público o exservidor público o por miembro o exmiembro de alguna corporación policial o de las fuerzas armadas. En este caso, se impondrá además al sujeto activo, destitución, en su caso, y suspensión para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos por un término igual a la sanción de prisión;
- VI. Si es cometido en contra de un menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien en una persona mayor de sesenta años.

CAPÍTULO VII DESPOJO

Artículo 211.- Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo:

- I. Ocupe un inmueble ajeno, o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;
- II. Ocupe un inmueble propio que se halle legítimamente en poder de otra persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante;
- III. Con el propósito de apropiarse de una fracción o de la totalidad del inmueble, altere términos o linderos de los predios o cualquier clase de señales o mojoneras destinadas a fijar los límites de los predios contiguos, tanto de dominio público como de propiedad particular;
- IV. Desvíe o derive las aguas ajenas o haga uso de ellas o de un derecho real que no le pertenezca;
- V. Desvíe o derive aguas propias en los casos en que la ley lo prohíbe o ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante.

Artículo 212.- Las sanciones del artículo anterior serán aplicables aun cuando el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudoso o esté en disputa.

Artículo 213.- Las sanciones del artículo 211 se aumentarán en un cuarto, cuando:

- I. El hecho punible se ejecutare por dos o más personas;
- II. El que lo ejecutare fuera reincidente, instigador o dirigente de la invasión;
- III. El que lo ejecutare fuera servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;
- IV. En la ejecución del hecho punible obrara violencia o engaño.

Artículo 214.- En el caso de la fracción III del artículo anterior, procederá la destitución del empleo, cargo o comisión.

Los delitos previstos en el presente Capítulo serán perseguidos por querrela de parte.

CAPÍTULO VIII DAÑO EN PROPIEDAD AJENA

Artículo 215.- Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena o de cosa propia, en perjuicio de tercero, se impondrán las siguientes sanciones:

- I. De tres a doce jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de diez a treinta días de salario, cuando el monto del daño no exceda de cincuenta salarios mínimos;
- II. De doce a treinta y seis jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de treinta a sesenta días de salario, cuando el monto del daño exceda de cincuenta, pero no de doscientos salarios mínimos;
- III. De uno a seis meses de tratamiento en semilibertad y multa de sesenta a cien días de salario si el monto del daño excede de doscientos, pero no de quinientos salarios mínimos;
- IV. De seis meses a un año de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días de salario, cuando el monto del daño exceda de quinientos, pero no de mil salarios mínimos;
- V. De uno a dos años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario, si el valor del daño excede de mil salarios mínimos, pero no de dos mil salarios mínimos;
- VI. De uno a cuatro años de prisión y multa de trescientos a quinientos días de salario, si el valor del daño excede de dos mil salarios mínimos.

Para estimar la cuantía de los daños se atenderá al valor comercial de la cosa dañada al momento de producirse el hecho, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero, o si por su naturaleza no fuera posible fijar su valor, se aplicarán de tres meses a tres años de prisión y multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario.

Las sanciones que correspondan se aumentarán en una mitad, cuando se cause daño mediante incendio, inundación o explosión.

Artículo 216.- Si además de los daños directos resulta consumado algún otro ilícito, se aplicará la regla del concurso de delitos.

Artículo 217.- Los delitos previstos en el presente Capítulo serán perseguidos por querrela de parte, salvo que los delitos se cometan mediante incendio, inundación o explosión.

CAPÍTULO IX ENCUBRIMIENTO POR RECEPCIÓN

Artículo 218.- A quien a sabiendas de la comisión de un delito y sin haber participado en éste, adquiera o reciba el producto del mismo, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión

y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario, o las sanciones que correspondan al responsable del ilícito encubierto, si éstas son más benévolas.

Además de las sanciones que correspondan, la prisión se aumentará en dos tercios, cuando quien adquiera o reciba la cosa se dedique en forma permanente o habitual a la compraventa de objetos, accesorios o partes nuevas o usadas, a sabiendas de su procedencia ilícita.

Artículo 219.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de ciento ochenta a doscientos ochenta días de salario, a quien sin haber participado en la comisión del delito de robo de vehículo y a sabiendas de la procedencia ilícita de dos o más de estos vehículos:

- I. Los desmantele o comercialice conjunta o separadamente sus partes;
- II. Los adquiera, detente, posea o custodie, aunque se encuentren en lugares diferentes;
- III. Los enajene, comercialice o trafique de cualquier forma;
- IV. Altere o modifique la documentación auténtica que acredite su propiedad o su tenencia oficial;
- V. Les altere de cualquier forma su apariencia física, para dificultar su identificación;
- VI. Los utilice en o para la comisión de otro u otros delitos.

Se aumentará hasta en una mitad la sanción de prisión impuesta, si quien comete las conductas mencionadas en las fracciones anteriores es servidor público; se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por un periodo igual al de la sanción privativa de libertad impuesta.

Se aplicará la mitad de las sanciones que correspondan a quien de acuerdo con las circunstancias en que adquiera o reciba, debió suponer la procedencia ilegítima de los vehículos.

TÍTULO SEXTO DELITOS CONTRA LA FAMILIA

CAPÍTULO I DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

Artículo 220. Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a quinientos días de salario a quien, con el fin de alterar el estado civil, incurra en alguna de las conductas siguientes:

- I. Presente a registrar a una persona y asuma la filiación que no le corresponda;
- II. Inscriba o haga registrar el nacimiento de una persona sin que esto hubiese ocurrido;
- III. Omita presentar para el registro del nacimiento a una persona y tenga dicha obligación, con el propósito de hacerle perder los derechos derivados de su filiación;
- IV. Declare falsamente el fallecimiento de una persona en el acta respectiva;
- V. Presente a registrar a una persona y atribuya a terceros la paternidad que no le corresponda;
- VI. Usurpe el estado civil o la filiación de otro con el fin de adquirir derechos de familia que no le correspondan;
- VII. Sustituya a una persona menor de edad o que no comprenda el significado del hecho por otra o la oculte para perjudicarla en sus derechos de familia;

VIII. Inscriba o haga registrar un divorcio o nulidad de matrimonio inexistentes o que aún no hubiesen sido declarados por sentencia que haya causado ejecutoria.

En el caso a que se refiere la fracción I de este artículo, la autoridad judicial no aplicará sanción alguna si el sujeto activo actúa por motivos nobles o humanitarios.

Este delito se perseguirá por querrela de parte.

CAPÍTULO II

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

Artículo 221.- A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos se le impondrá de un mes a un año de tratamiento en semilibertad. En todos los casos se condenará al pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente y, a criterio de la autoridad judicial, se decretará suspensión o pérdida de los derechos de familia.

Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero.

Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.

Artículo 222.- A quien renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión o multa de trescientos a un mil días de salario, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.

Artículo 223. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en desacato de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.

CAPÍTULO III

VIOLENCIA FAMILIAR

Artículo 224.- Se entiende por violencia familiar la omisión o el acto de poder, recurrente, intencional y cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia que cohabite en el mismo domicilio, realizado por quien con el tenga parentesco de consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, parentesco de consanguinidad colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, pareja de hecho, por una relación de tutela o curatela, y que tenga por efecto causar daño en cualquiera de las clases señaladas en la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche.

Al que cometa este delito se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión, suspensión o pérdida de los derechos de familia y hereditarios y, a criterio de la autoridad judicial, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado. En todo caso, se aplicará al victimario un tratamiento psicológico o psiquiátrico, en su caso.

La educación o formación del menor de edad o incapaz no será, en ningún caso, considerada justificante de maltrato.

Artículo 225.- En cualquier momento, el ministerio público podrá solicitar a la autoridad judicial la aplicación de medidas de protección para la víctima, conforme a la legislación correspondiente, y la autoridad judicial resolverá sin dilación.

CAPÍTULO IV SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES

Artículo 226.- Se impondrán de dos a nueve años de prisión y multa de ciento veinte a doscientos sesenta días de salario, al que, con el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor o de un incapaz, aunque dicha custodia no haya sido declarada, y sin fines de abuso o cualquier forma de explotación, lo entregue ilegítimamente a un tercero para su custodia a cambio de un beneficio económico. Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior, la sanción será de ocho a dieciocho años de prisión y multa de ciento sesenta a cuatrocientos ochenta días de salario.

Si la entrega definitiva del menor o incapaz se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la sanción aplicable al que lo entrega y al que lo recibe, será de seis meses a dos años de prisión, pero si se acredita que quien recibió al menor o incapaz lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar y otorgarle beneficios propios, a quien lo entrega se le aplicará una mitad de la sanción y a quien lo recibe no se le impondrá sanción alguna.

Además de las sanciones señaladas, se podrá privar de los derechos de patria potestad, tutela o custodia, en su caso, a quienes, cuando tengan el ejercicio de éstos, cometan los delitos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 227.- Se impondrán de dos meses a dos años de prisión y multa de ochenta a ciento cuarenta días de salario al ascendiente sin limitación de grado o pariente consanguíneo colateral o por afinidad hasta el cuarto grado, de un menor o incapaz, que lo sustraiga o cambie del domicilio donde habitualmente reside, lo retenga o impida que regrese al mismo, sin la autorización de autoridad competente o de quien o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o curatela, y no permitan a la madre o al padre convivir con el menor o visitarlo.

TÍTULO SÉPTIMO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNICACIÓN

CAPÍTULO I DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN

Artículo 228.- Para los efectos de este Código, se entiende por vías generales de comunicación estatal: las carreteras, caminos, calles, avenidas, calzadas, pasos a desnivel, puentes y pasos, construidos o en proceso de construcción directamente por el Estado o por los municipios u operados por éstos, que se ubiquen dentro de los límites de la Entidad, siempre que no sean de jurisdicción federal.

Artículo 229.- Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de ochenta a ciento ochenta días de salario al que dañe o destruya:

- I. Alguna vía local de comunicación;
- II. Algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga.

Si el transporte a que se refiere la fracción II de este artículo estuviera ocupado por una o más personas, las sanciones se aumentarán en una mitad.

Artículo 230.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de cuarenta a ciento cincuenta días de salario al que:

- I. Interrumpa u obstaculice alguna vía local de comunicación;
- II. Modifique o altere dolosamente el mecanismo de un vehículo de servicio público y haga que pierda su potencia, velocidad o seguridad;
- III. Retenga algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga.

Cuando el sujeto activo fuese el propio conductor o empleado del servicio, será también destituido del cargo y suspendido el mismo tiempo de la sanción de prisión para desempeñar empleo dentro del ramo.

Si el sujeto activo fuese concesionario, perderá también la concesión y será suspendido el mismo tiempo de la sanción de prisión para obtener otra en el mismo ramo.

Artículo 231.- Al que ponga en movimiento un medio de transporte público y provoque culpablemente un desplazamiento sin control que pueda causar daño, se le impondrán de cuarenta y ocho a ciento veinte jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

Artículo 232.- Al que, cuando emplee explosivos o materias incendiarias, destruya total o parcialmente un vehículo de servicio público local, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cuatrocientos a seiscientos días de salario. Lo previsto en este precepto se aplicará sin perjuicio de la sanción que corresponda por la comisión de otros delitos.

Artículo 233.- Al que para la comisión de un delito utilice o permita que se utilicen, con conocimiento de causa, instalaciones o medios de comunicación o de transporte públicos, que sean de su propiedad o que tenga bajo su cuidado, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de ciento veinte a ciento sesenta días de salario.

CAPÍTULO II SUPRESIÓN DE DISPOSITIVOS O DE SEÑALES DE SEGURIDAD

Artículo 234.- Se impondrán de doce a setenta y dos jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de veinte a ciento cincuenta días de salario, a quien destruya, inutilice, quite o modifique, dolosamente, dispositivos o señales para el control de tránsito en las vías públicas.

CAPÍTULO III VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Artículo 235.- Al que abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, se le impondrán de seis a cuarenta y ocho jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de diez a cien días de salario.

No se sancionará a quienes en ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia, abran o intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a las personas que se hallen bajo su patria potestad, tutela o custodia, ni a los cónyuges entre sí. Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo no comprende la correspondencia que circule por estafeta, respecto de la cual se observará lo dispuesto en la Ley del Servicio Postal Mexicano. Este delito se perseguirá por querrela.

TÍTULO OCTAVO DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA Y LA AUTENTICIDAD DOCUMENTAL

CAPÍTULO I FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS O DOCUMENTOS DE CRÉDITO PÚBLICO

Artículo 236.- Se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, al que:

- I. Falsifique o altere acciones, obligaciones u otros documentos de crédito público estatales o municipales, o cupones de interés o de dividendos de estos títulos;
- II. Introduzca al territorio del Estado o ponga en circulación los documentos mencionados en la fracción anterior, a sabiendas de su falsedad o alteración.

CAPÍTULO II FALSIFICACIÓN Y USO DE SELLOS, MARCAS, LLAVES Y OTROS

Artículo 237.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario al que, con el fin de obtener un beneficio o causar un daño:

- I. Falsifique los sellos o las marcas oficiales del Estado, de los municipios o de los notarios públicos;
- II. Falsifique el sello, marca o contraseña que alguna autoridad use para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto, derecho o aprovechamiento;
- III. Falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones y demás títulos o documentos a que se refiere el artículo anterior;

- IV. Falsifique boletos o fichas de un espectáculo público organizado por autoridades estatales y municipales, en cumplimiento de sus funciones;
- V. Use o enajene los objetos falsificados o alterados señalados en las fracciones anteriores.

Artículo 238.- Cuando las conductas descritas en el artículo anterior se cometan en perjuicio de un particular, se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientos cincuenta días de salario.

CAPÍTULO III FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

Artículo 239.- Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario a la persona que cometa el delito de falsificación o alteración de documentos públicos o privados.

Artículo 240.- Comete el delito de falsificación o alteración de documentos públicos o privados el que, con la finalidad de obtener algún provecho para sí o para otro, realice lo siguiente:

- I. Emita un documento público no auténtico;
- II. Oculte o destruya un documento auténtico o veraz;
- III. Coloque una firma o rúbrica falsa, o se altere una verdadera;
- IV. Se aproveche indebidamente de una firma o rúbrica plasmada en documento en blanco, se extienda una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes o la integridad de otra persona, o causar un perjuicio a ésta o al Estado o los municipios;
- V. Altere el texto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambia su sentido sobre alguna circunstancia substancial, ya sea que se añada, enmiende o borre, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas;
- VI. Varíe la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento;
- VII. Extienda documento en el que se atribuya, o atribuya a la persona en cuyo nombre actúa, un nombre, investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sean necesarios para la validez del acto. La misma sanción se aplicará al tercero, si se actúa en su representación o con su consentimiento respecto del hecho ilícito;
- VIII. Añada o altere cláusulas o declaraciones, o se asienten como ciertos hechos falsos, o como confesados los que no están, si el documento en que se asientan se extiende para hacerlos constar y como prueba de ellos;
- IX. Produzca o reproduzca por cualquier medio técnico o electrónico, imágenes, textos o voces total o parcialmente falsos;
- X. Como perito traductor o paleógrafo altere, dolosamente, de manera sustancial el contenido de un documento, al traducirlo o descifrarlo;
- XI. En su calidad de médico, falsamente haga constar en un documento que una persona padece una enfermedad u otra afectación suficiente para dispensarla de cumplir una obligación legal, hacerla adquirir un derecho o evadir alguna responsabilidad.

Artículo 241.- Se incrementará en una mitad la sanción prevista en el artículo 239, cuando la falsificación sirva como medio para la comisión de otros delitos.

CAPÍTULO IV USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS

Artículo 242.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario al que haga uso de un documento falso o alterado, o use indebidamente un documento verdadero expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido legalmente a su nombre.

CAPÍTULO V DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 243.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Título sea cometido por un servidor público, como resultado del ejercicio de sus funciones, se le impondrán, además de las sanciones que correspondan, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación por un término igual al de la sanción de prisión.

TÍTULO NOVENO DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD Y EL HONOR DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I DELITOS DE ODIO

Artículo 244.- Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por:

- I. Odio: Cuando el agente cometiere el hecho por antipatía y aversión contra una persona o su patrimonio, específicamente por su condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; nacionalidad o lugar de origen; color de piel o cualquier otra característica genética; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud o embarazo; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad;
- II. Violencia física: Cualquier acto de agresión intencional, en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física o al patrimonio de una persona;
- III. Violencia psicológica: Cualquier conducta que consista en actos u omisiones, cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, ofensas, insultos y burlas que provoquen en quien las recibe un deterioro, disminución o afectación de su personalidad.

Artículo 245.- Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a trescientos cincuenta días de salario a quien cometa actos de violencia física o psicológica en contra de una persona o su patrimonio por motivos de odio.

Artículo 246.- Se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a ciento treinta días de salario a quien, públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, provoque o incite, a través del odio, a cualquier forma de violencia física o psicológica.

Artículo 247.- Se impondrán de seis meses a un año de tratamiento en semilibertad y multa de ciento veinte a doscientos cincuenta días de salario, a quien con motivo de odio:

- I. Anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas;
- II. Niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;
- III. Cometa vejación o exclusión;
- IV. Niegue o restrinja los derechos laborales o el acceso a los mismos, sin causa justificada.

Artículo 248.- Los tipos penales previstos en el presente capítulo se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la comisión de otros delitos, salvo el caso de feminicidio en el que el delito de odio se subsumirá.

Si el acto motivado por odio se comete en contra de dos o más personas, las sanciones contenidas en los artículos 245 y 247 se aumentarán en una mitad.

Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo sea cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se le impondrán, además de las sanciones que correspondan, a criterio de la autoridad judicial, suspensión, destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo lapso de la sanción impuesta.

Los delitos contenidos en este capítulo se perseguirán por querrela, excepto el tipo penal establecido en el artículo 246 que se perseguirá de oficio.

CAPÍTULO II

CALUMNIA

Artículo 249.- Se impondrán de tres meses a un año de prisión y multa de cien a trescientos días de salario a quien acuse a otro de haber cometido un delito a sabiendas de que tal acusación es falsa.

Si la calumnia se difunde por cualquier medio de comunicación, internet o medios electrónicos, las sanciones se aumentarán al doble.

Si el responsable del delito recibió o le prometieron alguna recompensa o dádiva por su comisión, las sanciones serán de uno a tres años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días de salario.

TÍTULO DÉCIMO

DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

CAPÍTULO I CORRUPCIÓN DE MENORES O INCAPACES

Artículo 250.- A quien por cualquier medio induzca, presione u obligue a una persona menor de edad o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, al consumo de bebidas alcohólicas, se le impondrán de veinticuatro a ciento dos jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de diez a cien días de salario.

Cuando de la práctica reiterada del activo, el pasivo del delito adquiera el hábito del alcoholismo, la penalidad será de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a doscientos cincuenta días de salario.

Artículo 251.- A quien por cualquier medio induzca, presione u obligue a una persona menor de edad o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, al consumo de narcóticos, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario.

Cuando de la práctica reiterada del activo, el pasivo del delito adquiera el hábito de la farmacodependencia, la penalidad será de dos a cuatro años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario.

Artículo 252.- A quien por cualquier medio induzca, presione u obligue a una persona menor de edad o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a formar parte de una asociación delictuosa, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario.

Artículo 253.- A quien por cualquier medio, y sin obtener beneficio alguno, induzca a una persona menor de edad o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a practicar la prostitución o a realizar actos de exhibicionismo corporal obsceno, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de trescientos a setecientos días de salario.

Cuando, derivado de la conducta del activo, el pasivo del delito practique habitualmente la prostitución o el exhibicionismo corporal obsceno, la penalidad será de cuatro a ocho años de prisión.

Para efectos de este artículo, se entiende por actos de exhibicionismo corporal obsceno a toda presentación del cuerpo humano con fin lascivo sexual.

Artículo 254.- A quien emplee, aun gratuitamente, a personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho y utilicen sus servicios en lugares o establecimientos donde preponderantemente se expendan bebidas alcohólicas para su consumo inmediato o se presenten al público espectáculos con contenido exclusivo para adultos, se le impondrán de doce a setenta y dos jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de cien a trescientos días de salario. En caso de reincidencia, se ordenará la clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 255.- A quien induzca a una persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, directa o indirectamente, a observar escenas, espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico u obsceno, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario.

Las mismas sanciones se impondrán a quien por cualquier medio directo venda, difunda o exhiba material pornográfico entre personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho.

Artículo 256.- Al que ejecute intencionalmente o haga ejecutar a otra persona actos de exhibicionismo corporal obsceno ante personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario.

Las mismas sanciones se impondrán a quien pague o prometa pagarle con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a un tercero para que tenga cópula o realice actos sexuales o eróticos con una persona menor o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho. La misma sanción se impondrá al tercero involucrado en los tipos penales contenidos en este artículo, excepto cuando el tercero involucrado sea víctima de los delitos de trata de personas o lenocinio.

Artículo 257.- A quien pague o prometa pagarle con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, para que tenga cópula o realice actos sexuales o eróticos con el sujeto activo o con un tercero, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días de salario, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la comisión de otros delitos.

Artículo 258.- Las sanciones establecidas en los artículos anteriores se aumentarán en una mitad cuando el responsable tenga parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, o habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno, así como por el tutor o curador.

Artículo 259.- No se actualizarán los delitos de este Capítulo cuando se trate de programas educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, particulares en el ejercicio profesional, ascendientes en línea recta sin límite de grado, tutores, o quienes ejerzan la patria potestad, siempre que tengan por objeto la educación sexual, la educación sobre la función reproductiva, la prevención de infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado de adolescentes.

CAPÍTULO II

PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE EDAD O QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO

Artículo 260.- Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de cuatrocientos a ochocientos días de salario:

- I. A quien produzca, fije, grabe, videografe, fotografíe o filme de cualquier forma imágenes o la voz de una persona menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas, y obtenga cualquier beneficio distinto al económico ;
- II. A quien reproduzca, publique, publicite, distribuya, difunda, exponga, envíe, transmita, importe, exporte o comercialice de cualquier forma imágenes o la voz de una persona menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas, y obtenga cualquier beneficio distinto al económico.

Artículo 261.- A quien financie, dirija, administre o supervise cualquiera de las actividades previstas en las fracciones del artículo anterior, se le impondrán de cuatro a doce años de prisión y multa de ochocientos a mil doscientos días de salario.

Artículo 262.- A quien ofrezca, posea o almacene intencionalmente sin fines de comercialización, el material a que se refieren las fracciones I y II del artículo 260 de este Código, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario.

CAPÍTULO III LENOCINIO

Artículo 263.- A quien obtenga una ventaja financiera u otro beneficio procedente de los servicios sexuales de otra persona, con consentimiento de ésta, sin que medie engaño, violencia física o moral, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de daño grave, amenaza de denunciarle ante autoridades respecto de su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de ley o de procedimientos legales que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo, o se trate de personas menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, se le impondrán de dos a siete años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario.

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 264.- Cuando el responsable tenga parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, o habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio con la víctima, aunque no

existiera parentesco alguno, o fuera el tutor o curador de la víctima, perderá la patria potestad respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos que le correspondieran por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto a los bienes de ésta.

Artículo 265.- Si en la comisión de los delitos previstos en este Título el sujeto se valiese de la función pública o privada, la profesión u oficio que desempeña, aprovechándose de los medios o circunstancias que ellos le proporcionan, se le destituirá del empleo, cargo o comisión públicos y se le inhabilitará para desempeñar otro, o, en su caso, se le suspenderá del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual al de la sanción de prisión impuesta.

Artículo 266.- En todos los casos del presente Título, además de la sanción señalada para cada uno de los tipos penales, se aplicará un tratamiento psicológico o psiquiátrico al sujeto activo del delito y tendrá la duración que la autoridad judicial disponga, sin que exceda del tiempo que dure la sanción de prisión y sin perjuicio de la aplicación de otros tratamientos.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DELITOS EN MATERIA DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES

CAPÍTULO ÚNICO DELITOS CONTRA LAS NORMAS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS

Artículo 267.- El que por sí mismo, o por interpósita persona, oculte, destruya, mutile o traslade un cadáver, un feto o restos humanos, o practique una inhumación o exhumación, y contravenga lo dispuesto por las leyes o reglamentos sanitarios respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para ello, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de cien a doscientos cincuenta días de salario.

Artículo 268.- Se le impondrán las mismas sanciones del artículo anterior:

- I. Al que profane un túmulo, sepultura o féretro;
- II. Al que comercie o trafique con un cadáver o restos humanos;
- III. Al que profane un cadáver o restos humanos.

Se entenderá por profanar: el trato sin el debido respeto a algo que se considera digno de honra. Se entenderá por comerciar: el comprar, vender o cambiar uno o más productos para obtener un beneficio económico.

Se entenderá por traficar: el realizar operaciones comerciales de manera ilegal o con productos prohibidos.

Artículo 269.- Las sanciones de los artículos anteriores se aumentarán en una mitad a quien oculte, destruya, mutile o, sin la licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, feto o restos humanos, siempre que la muerte haya sido a consecuencia de lesiones y el sujeto activo tenía previo conocimiento de esa circunstancia.

Artículo 270.- Las sanciones previstas en el artículo 267 se incrementarán en una mitad si el hecho punible se cometiera por una o más personas de alguna institución de gobierno o educativa, en clínica, sanatorio u hospital público o privado, sin previa autorización del ministerio público, de la autoridad judicial y de los familiares o de los deudos.

Artículo 271.- En todos los casos de este Capítulo, si el hecho punible derivara en la ejecución del acto de necrofilia, consistente en la realización de coito con un cadáver, se impondrá el doble de las sanciones establecidas en el artículo 267, además de tratamiento psicológico o psiquiátrico por un tiempo igual al de la prisión.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO PORTACIÓN Y FABRICACIÓN DE ARMAS PROHIBIDAS

Artículo 272.- Se impondrán de seis meses a tres años de prisión, multa de cien a trescientos cincuenta días de salario y decomiso de los objetos del delito, al que porte, fabrique, importe o acopie, sin un fin lícito, alguna o algunas de las armas siguientes:

- I. Los instrumentos cortantes, punzantes o punzocortantes que por su descripción, tamaño y la dimensión de su cacha, si la tuviera, deban estimarse potencialmente lesivos;
- II. Las manoplas, macanas, hondas con pesas o puntas similares;
- III. Los instrumentos laborales que por sus características puedan ser utilizados para agredir y se porten para menesteres diversos al trabajo.

En caso de que cualquiera de las armas mencionadas en las fracciones anteriores esté oculta o disimulada en bastones u otros objetos, se aumentará la multa hasta un tercio.

Se entiende por acopio la reunión de tres o más armas de las mencionadas en las fracciones anteriores, sin un fin lícito.

Artículo 273.- Se impondrán de uno a cuatro años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, decomiso y suspensión hasta por un año para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que fuera de sus actividades laborales, en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes o sustancias tóxicas, porte las armas autorizadas para el ejercicio de su cargo.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO DELITOS CONTRA LA PRESTACIÓN ADECUADA DEL SERVICIO PROFESIONAL

CAPÍTULO I ABANDONO, NEGACIÓN Y PRÁCTICA INDEBIDA DEL SERVICIO MÉDICO

Artículo 274.- Se impondrán de seis meses a tres años de prisión, multa de cincuenta a doscientos días de salario y suspensión igual a la sanción de prisión para desempeñar cargos, comisiones o empleos, al médico y demás profesionales similares y auxiliares que, habiéndose hecho cargo de la atención de un enfermo o de un lesionado, deje de prestar el tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente, o no cumpla con las obligaciones que impone la legislación de la materia.

Artículo 275.- Se impondrán de uno a cuatro años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario y suspensión igual a la sanción de prisión para desempeñar cargos, comisiones o empleos, al médico y demás profesionales similares y auxiliares, que, en ejercicio de su profesión:

- I. Encontrándose en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a éste, no lo atienda ni lo traslade a la institución adecuada para su curación;
- II. En caso de urgencia, se niegue a prestar asistencia a un enfermo y con ello ponga en peligro la vida o la salud de aquél, cuando por las circunstancias del caso no pueda recurrir a otro médico ni a un servicio de salud.

Artículo 276.- Se impondrán de dos a cinco años de prisión, multa de cuatrocientos a setecientos días de salario y suspensión igual a la sanción de prisión para desempeñar cargo, comisión o empleo relacionado con su profesión, al médico que:

- I. Realice una operación quirúrgica innecesaria;
- II. Sin autorización del paciente o de la persona que pueda legítimamente otorgarla ante la imposibilidad o incapacidad de aquél, salvo en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que, por su naturaleza, ponga en peligro la vida del enfermo o le cause la pérdida de un miembro u órgano o le afecte la integridad de una función vital.

En caso de reincidencia se impondrá sanción de inhabilitación de cargo, comisión o empleo relacionado con su profesión.

Artículo 277.- Para efectos del presente Capítulo, si con motivo de los hechos punibles se produjeran otros ilícitos, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

CAPÍTULO II REQUERIMIENTO ARBITRARIO DE LA CONTRAPRESTACIÓN

Artículo 278.- Se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de cien a trescientos días de salario y suspensión igual a la sanción de prisión para desempeñar cargos, comisiones o empleos, al dueño, director, administrador o encargado de cualquier centro de salud que invoque adeudos de cualquier índole con el fin de:

- I. Impedir el egreso de un paciente, cuando éste o sus familiares soliciten la salida;
- II. Retener sin motivo justificado a un recién nacido;
- III. Retardar o negar la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.

CAPÍTULO III USURPACIÓN DE PROFESIÓN

Artículo 279.- Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario al que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedida por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 de la Constitución Federal:

- I. Se atribuya el carácter de profesionista;
- II. Realice actos propios de una actividad profesional, con las salvedades previstas en la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado;
- III. Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista;
- IV. Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello;
- V. Con objeto de lucrar, se una a profesionales legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS BIENES JURÍDICOS

CAPÍTULO I PROVOCACIÓN A LA COMISIÓN DE UN DELITO O APOLOGÍA DEL DELITO

Artículo 280.- Se impondrán de veinticuatro a ciento cuarenta y cuatro jornadas de trabajo a favor de la comunidad o multa de treinta a ciento cincuenta días de salario, al que públicamente provoque a otro a cometer un delito, o haga apología de éste o de algún vicio, si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se impondrá al provocador la sanción que corresponda por su participación en la comisión del delito.

Para los efectos de este Capítulo, se entiende por provocación cuando directamente se incita por cualquier medio que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la comisión de un delito. Se entiende por apología la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio que facilite la publicidad, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.

CAPÍTULO II PANDILLA Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA

Artículo 281.- Cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrán de seis meses a dos años de prisión a los que intervengan en su comisión, sin perjuicio de las sanciones aplicables por el o los delitos cometidos.

Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometan en común algún delito y tengan la calidad de primodelincuentes.

Artículo 282.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario al que forme parte de una asociación o banda integrada por tres o más personas organizadas con fines delictuosos, por el sólo hecho de ser miembro de la asociación e independientemente de las sanciones que le correspondan por el delito que haya cometido. No se aplicará esta disposición, si el delito cometido es alguno de los contenidos en la legislación federal en materia de delincuencia organizada.

Artículo 283.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aumentarán en una mitad:

- I. Si el miembro de la asociación delictuosa es o ha sido servidor público de alguna corporación policial o integrante de alguna empresa particular autorizada para prestar servicios de seguridad o protección, o haya sido miembro de alguno de los cuerpos de las fuerzas armadas, y se le impondrá, además, la destitución de empleo, cargo o comisión públicos y suspensión de cinco a diez años para desempeñar otro;
- II. Cuando la asociación o alguno de sus miembros, utilice a menores de edad o incapaces para delinquir.

En todos los casos de este Capítulo, se aplicará el decomiso, en beneficio del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, de aquellos bienes cuya procedencia lícita no se logre acreditar de acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente.

CAPÍTULO III EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO

Artículo 284.- Al que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho, empleare violencia, se le impondrán de doce a sesenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de veinte a cien días de salario.

Este delito se perseguirá por querrela.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO DELITOS CONTRA EL ERARIO Y EL SERVICIO PÚBLICOS

CAPÍTULO I EJERCICIO INDEBIDO O ABANDONO DE SERVICIO PÚBLICO

Artículo 285.- Para los efectos de este Código, son servidores públicos las personas mencionadas en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 286.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el que:

- I. Ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales;
- II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido, o después de haber renunciado, salvo que por disposición de la ley deba continuar ejerciendo sus funciones hasta ser relevado;
- III. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de cualquier acto u omisión que puedan afectar gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de las mencionadas en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado, y no lo informe por escrito a su superior jerárquico, o no lo evite si está dentro de sus facultades;
- IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión;
- V. Sin habersele admitido la renuncia de una comisión, empleo o cargo, o antes de que se presente la persona que haya de reemplazarlo, lo abandone sin causa justificada;
- VI. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos incumpla su deber, o en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o propicie la pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.

Al que incurra en alguna de las conductas a que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, se le impondrán de tres meses a un año de prisión, multa de cincuenta a cien días de salario, destitución y suspensión para desempeñar empleo cargo o comisión públicos por igual término de la sanción privativa de libertad.

Al que incurra en alguna de las conductas previstas en las fracciones III, IV, y VI antes señaladas, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión, multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario, destitución, en su caso, e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 287.- Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario al servidor público que, sin causa justificada, abandone sus funciones sin haber presentado su renuncia, o al que habiéndole sido aceptada, no entregue todo aquello que haya sido objeto de su responsabilidad a la persona autorizada para recibirlo, siempre que se cause perjuicio a la buena marcha de la función a su cargo.

Para los efectos de este artículo, el abandono de funciones se consumará cuando el servidor público se separe sin dar aviso a su superior jerárquico con la debida anticipación, conforme a la normatividad aplicable o, de no existir ésta, en un plazo previo de tres días.

Artículo 288.- Se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue o autorice el nombramiento de un empleo, cargo o comisión en el servicio público a

persona que por resolución firme de autoridad competente se encuentre inhabilitada para desempeñarlo.

Las sanciones se aumentarán en una mitad a quien otorgue cualquier identificación en la que se acredite como servidor público a persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación.

Las mismas sanciones se impondrán a quien acepte la identificación.

CAPÍTULO II ABUSO DE AUTORIDAD

Artículo 289.- Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público cuando:

- I. Para impedir la ejecución de una ley, decreto, reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto;
- II. En la realización de sus funciones o con motivo de ellas, ejerza violencia contra alguna persona, la veje o la insulte;
- III. Indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;
- IV. Retarde o entorpezca, de mala fe, el despacho de los asuntos de su competencia;
- V. Se abstenga o se niegue a conocer de asuntos de su competencia, sin tener impedimento legal, o a intervenir en ellos si estuviere legalmente obligado;
- VI. No cumpla cualquier disposición oficial que legalmente le comunique su superior, o un acuerdo u orden del mismo, sin causa fundada para ello;
- VII. Ejecute actos o incurra en omisiones que produzcan daño o concedan alguna ventaja a cualquier persona;
- VIII. Se encuentre encargado de una fuerza pública y, requerido legalmente por la autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo;
- IX. Haga que le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan confiado y se los apropie o disponga de ellos indebidamente;
- X. Con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio;
- XI. Aproveche el poder o autoridad propios del empleo o cargo o comisión que desempeñe para satisfacer indebidamente un interés propio o ajeno;
- XII. En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contrato de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se nombró al designado, o no se cumplirá el contrato otorgado.

Al que incurra en alguna de las conductas previstas en las fracciones II, IV y V, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión, multa de veinte a doscientos días de salario y destitución o suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un término igual al de la sanción de prisión.

Al que incurra en alguna de las conductas previstas en las demás fracciones, se le impondrán de dos a seis años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario y destitución o

suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un término igual al de la sanción de prisión.

CAPÍTULO III COALICIÓN

Artículo 290.- Se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de doscientos a quinientos días de salario, destitución y suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por igual término, a los servidores públicos que se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para evitar su ejecución, o impedir o suspender las funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales.

CAPÍTULO IV USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES

Artículo 291.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

- I. El servidor público que indebidamente otorgue:
 - a) Concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado o de los municipios;
 - b) Permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
 - c) Exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales o sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública estatal o municipal;
 - d) Realice o contrate obra pública, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores para beneficio personal con recursos económicos públicos.
 - e) Licencia de construcción, obras de infraestructura, uso de suelo, asentamientos humanos o cualquier otro permiso similar, sin estar legalmente facultado para ello o estándolo no solicite a la autoridad competente los dictámenes de análisis de riesgo en los términos de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche.
 - f) Licencia de construcción, obras de infraestructura, uso de suelo, asentamientos humanos o cualquier otro permiso similar, sin solicitar las medidas de mitigación cuando sean procedentes o que al autorizar las medidas de mitigación deriven en la generación o incremento de peligros o riesgos en construcciones o centros de población aledaños en los términos de la Ley de Protección Civil, Prevención y atención de Desastres del Estado de Campeche.
- II. El servidor público que, cuando tenga a su cargo fondos públicos, les dé, a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal;
- III. En el desempeño de su empleo, cargo o comisión indebidamente otorgue, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendientes, parientes

por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;

IV. Utilice la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, fuere o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, para, por sí o por interpósita persona, realizar inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido o a alguna de las personas mencionadas en la fracción III de este artículo.

Al que cometa el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, se le impondrán las siguientes sanciones:

- A. Cuando el monto a que ascienda las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del equivalente de quinientos salarios mínimos o no sea valuable, de seis meses a dos años de prisión, multa de cincuenta a trescientos cincuenta días de salario, destitución y suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por igual término;
- B. Cuando dicho monto exceda del equivalente a quinientos salarios mínimos, de dos a ocho años de prisión, multa de trescientos cincuenta a setecientos días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por igual término.
- C. Cuando se trate de las hipótesis contenidas en el inciso e) de la fracción I del presente artículo, se impondrá al servidor público de dos a seis años de prisión y multa de mil a diez mil días de salario mínimo, independientemente de que su conducta pueda incurrir en responsabilidad administrativa.
- D. Cuando se trate de las hipótesis contenidas en el inciso f) de la fracción I del presente artículo, se impondrá al servidor público de tres a nueve años de prisión y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo, independientemente de que su conducta pueda incurrir en responsabilidad administrativa.

CAPÍTULO V CONCUSIÓN

Artículo 292.- Comete el delito de concusión el servidor público que con tal carácter y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa indebida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley. Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones:

- I. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente a quinientos salarios mínimos, o no sea valuable, de uno a tres años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario, destitución y suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por igual término;
- II. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientos salarios mínimos, de tres a nueve años de prisión, multa de cuatrocientos a

novecientos días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

CAPÍTULO VI INTIMIDACIÓN

Artículo 293.- Se le impondrán de dos a seis años de prisión, multa de trescientos a novecientos días de salario, destitución y suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por igual término al servidor público que:

- I. Por sí, o por interpósita persona, utilice violencia física o psicológica contra cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querrela o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche;
- II. Por sí, o por interpósita persona, ejerza represalia contra persona que ha formulado denuncia o querrela o aportado información o pruebas sobre la presunta comisión de un delito o sobre el presunto incumplimiento de algún servidor público en una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche, o ejerza cualquier represalia contra persona ligada por vínculo afectivo o de negocios con el denunciante, querrellante o informante.

CAPÍTULO VII COHECHO

Artículo 294.- Comete el delito de cohecho el servidor público que, por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para indebidamente hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones.

Se equipara al delito de cohecho cuando el particular ofrece, promete o entrega dinero o cualquier dádiva, a algún servidor público, para que realice u omita un acto o actos ilícitos o lícitos relacionados con sus funciones.

Al servidor público que cometa el delito de cohecho, se le impondrán las siguientes sanciones:

- I. Cuando la cantidad o valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente a quinientos salarios mínimos, o no sea valuable, de uno a cuatro años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario, destitución y suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por igual término;
- II. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa exceda de quinientos salarios mínimos, de cuatro a ocho años de prisión, multa de cuatrocientos a novecientos salarios mínimos, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Al particular que cometa delito de cohecho se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario.

En ningún caso se devolverá el dinero o dádivas entregadas, las que se destinarán al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.

CAPÍTULO VIII PECULADO

Artículo 295.- Comete el delito de peculado el servidor público que, para usos propios o ajenos, utilice o distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, municipios, poderes legislativo y judicial del estado, dependencias o entidades de la administración pública estatal, los organismos autónomos estatales, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa.

Artículo 296.- Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente a mil salarios mínimos, o no sea valuable, se sancionará al responsable con uno a cinco años de prisión, multa de cien a quinientos días de salario, destitución y suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por igual término.

Si el monto excede del equivalente a mil salarios mínimos, la sanción será de cinco a diez años de prisión, multa de quinientos a dos mil días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 297.- Cuando el servidor público utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo 291 de este Código, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o con el objeto de denigrar a cualquier persona, se aumentarán en una mitad las sanciones establecidas en el artículo anterior.

Artículo 298.- Al particular que solicite o acepte realizar la promoción de la imagen política o social de un servidor público o de un tercero, o la denigración de cualquier persona, con fondos públicos obtenidos indebidamente, se le aplicará sanción de cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días de salario.

Artículo 299.- Se impondrán las sanciones establecidas en el artículo 296, en lo que corresponda, al particular que obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

CAPÍTULO IX ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Artículo 300.- Comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que, durante el desempeño de su cargo o en los dos años posteriores al término de dicho cargo o de su

renuncia, incremente injustificadamente su patrimonio, sin que pueda comprobar su legítima procedencia, en razón a que el valor de los bienes sea notoriamente superior a sus ingresos devengados u obtenidos lícitamente.

Para determinar el enriquecimiento del servidor público se tomarán en cuenta los bienes a su nombre, los bienes del cónyuge, independientemente de su régimen matrimonial, los de su concubina o concubinario y los que aparezcan acreditados a favor de sus hijos, adquiridos durante el término señalado en el párrafo anterior.

Artículo 301.- Al servidor público que cometa el delito de enriquecimiento ilícito, se le sancionará:

- I. Cuando el monto al que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a dos mil salarios mínimos, con prisión de uno a tres años, multa de trescientos a mil días de salario, destitución y suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por igual término a la sanción de prisión;
- II. Cuando el monto al que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente a dos mil salarios mínimos, con prisión de tres a diez años y multa de mil a dos mil días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

En ambos casos, en términos del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de las sanciones señaladas, se decretará el decomiso y la privación de la propiedad de los bienes mal habidos, los que se destinarán al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado.

Artículo 302.- Se le impondrá un tercio de las sanciones señaladas en el artículo anterior al particular que haga figurar como suyos bienes que un servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado.

**TÍTULO DÉCIMO SEXTO
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EN
EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

**CAPÍTULO I
DELITOS COMETIDOS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA**

**SECCIÓN PRIMERA
APREHENSIÓN ILEGAL**

Artículo 303.- Se impondrán de dos a seis años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos cincuenta días de salario, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que, sin orden de aprehensión librada por la autoridad judicial competente, detenga a una persona, fuera de los casos de delito

flagrante o urgencia, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SECCIÓN SEGUNDA RETARDO ILEGÍTIMO EN LA ENTREGA DE UN DETENIDO

Artículo 304.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión, multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al agente del ministerio público que se abstenga de poner al detenido a disposición del juez competente dentro del término señalado por la Constitución Federal, cuando la detención se realice en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Artículo 305.- Al agente ministerial que reciba a un detenido en flagrante delito por un particular o por otro servidor público y no lo ponga a disposición de la autoridad judicial competente dentro del término de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que dicho detenido le fue entregado, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión, multa de trescientos a quinientos días de salario y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. En caso de reincidencia, procederá la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. La misma sanción será impuesta al policía ministerial o de seguridad pública que, al realizar la detención de un inculpado en los casos de delito flagrante o casos urgentes, no ponga injustificadamente al detenido a disposición de la autoridad competente sin dilación alguna.

SECCIÓN TERCERA EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN INVESTIGADORA

Artículo 306.- Comete el delito de ejercicio indebido de la función investigadora el agente del ministerio público que:

- I. Se niegue a recibir una denuncia o querrela o impida o retarde la presentación de la misma sin causa justificada;
- II. Se niegue a ejercitar, sin causa justificada, la acción penal;
- III. Ejercite acción penal en contra de persona alguna sin que preceda denuncia o querrela;
- IV. Obligue, por cualquier medio, al inculpado a declarar en su contra;
- V. Incomunique al inculpado, o niegue, a quien tiene derecho a saber, que una persona está detenida;
- VI. Practique un cateo fuera de los casos autorizados y sin cumplir los requisitos exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes correspondientes;
- VII. No le haga saber al inculpado, desde el primer momento de su intervención, sus derechos, omita informarle la naturaleza y causa de la imputación o el delito que se le atribuye o no le nombre un defensor de oficio si el inculpado no cuenta con defensor particular o se niega a nombrar uno;

- VIII. No realice los trámites necesarios o los retarde para celebrar la audiencia inicial, una vez que el inculpado haya manifestado su derecho a declarar.
- IX. Demore injustificadamente el cumplimiento de la resolución judicial que ordene poner en libertad a un detenido.

Artículo 307.- En los casos establecidos en el artículo anterior, se impondrá al responsable sanción de uno a cuatro años de prisión, multa de cien a doscientos cincuenta días de salario y suspensión en el ejercicio del empleo, cargo o comisión por el tiempo de la sanción de prisión. En caso de reincidencia, procederá la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

SECCIÓN CUARTA INCUMPLIMIENTO DE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN

Artículo 308.- El agente del ministerio público a quien corresponda acatar la medida de protección dictada por autoridad judicial a favor de los sujetos en situación de riesgo, que no le diere cabal cumplimiento en los términos y condiciones establecidos en la legislación en la materia, se le impondrán multa de cien a quinientos días de salario y suspensión de hasta un año en el desempeño del empleo, cargo o comisión.

CAPÍTULO II DELITOS COMETIDOS POR LOS JUECES

SECCIÓN PRIMERA PREVARICACIÓN

Artículo 309.- Se impondrán de dos a seis años de prisión, multa de trescientos cincuenta a setecientos días de salario, destitución e inhabilitación por el mismo tiempo de la sanción de prisión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al juez que:

- I. Dolosamente libre orden de aprehensión cuando el ministerio público o, en su caso, la víctima o el ofendido, no haya ejercitado acción penal en contra del inculpado;
- II. Ponga injustificadamente en libertad a un detenido;
- III. Permita ilegalmente la salida temporal de las personas que estén privadas de la libertad;
- IV. No cumpla, sin causa fundada, una disposición relativa al ejercicio de sus funciones que legalmente deba de realizar;
- V. No ordene la libertad del inculpado cuando sea acusado por delito que tenga señalada sanción no privativa de libertad, o cuando se determine una suspensión del proceso a prueba.

Artículo 310.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión, multa de doscientos a quinientos días de salario, destitución e inhabilitación por el mismo término de la sanción de prisión para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al juez que:

- I. Conozca de un negocio respecto del cual tenga impedimento legal;

- II. Ejecute un acto o incurra en una omisión que produzca un daño o conceda a alguien una ventaja indebida;
- III. Adquiera, por sí o por medio de otro, algún bien objeto del remate en cuyo procedimiento haya intervenido;
- IV. Sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, admita o nombre un depositario, o le entregue a éste los bienes secuestrados;
- V. Aproveche el poder, empleo, cargo o comisión para satisfacer indebidamente algún interés propio;
- VI. Indebidamente haga conocer al demandado, con anticipación, la providencia de embargo decretada en su contra;
- VII. Nombre síndico o interventor, en un concurso mercantil, a un deudor, pariente, abogado o ex abogado del sujeto en quiebra, a un pariente o amigo estrecho del servidor público, o a persona ligada con éste por algún negocio de interés común;
- VIII. Dicte, por imprudencia o por motivos ilícitos, una sentencia contraria a las constancias de autos y que produzca daño en la persona, el honor, los intereses o los bienes de alguien, o en perjuicio del interés social.

SECCIÓN SEGUNDA

EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

Artículo 311.- Se impondrán de tres a siete años de prisión, multa de trescientos a seiscientos días de salario, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al juez que:

- I. Admita recursos notoriamente improcedentes o conceda términos o prórrogas indebidos;
- II. No dicte auto de vinculación a proceso o de libertad de un detenido dentro de las setenta y dos horas siguientes de haber sido puesto a su disposición, o no comunique oportunamente su determinación a los encargados de los centros preventivos donde estuviere recluso, salvo el caso de ampliación del término en beneficio del inculcado;
- III. Exija gabelas o contribuciones a los encargados o empleados de lugares de reclusión o internamiento, a los internos o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado, o para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen;
- IV. Prolongue injustificadamente la prisión preventiva, sin sentencia definitiva, por más tiempo del que como máximo fija la Constitución Federal;
- V. No otorgue la libertad provisional legalmente procedente, cuando ésta haya sido solicitada.

CAPÍTULO III

DENEGACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 312.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión, multa de cien a quinientos días de salario, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al juez que:

- I. Se abstenga de conocer un negocio que le corresponda, sin tener impedimento legal para ello;
- II. Omita dictar dentro del plazo legal una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo o de trámite, sin que medie causa justificada para ello;
- III. Retarde o entorpezca la administración de justicia;
- IV. Bajo el pretexto de oscuridad o silencio de la ley o cualquier otro, se niegue injustificadamente a despachar, dentro del plazo legal, un negocio pendiente ante él.

CAPÍTULO IV DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 313.- A la autoridad judicial o al agente del ministerio público que litigue, por sí o por interpósita persona, cuando la ley le prohíba el ejercicio de su profesión, se impondrán de seis meses a tres años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 314.- Se impondrán de uno a cuatro años de prisión, multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión público, a la autoridad judicial que dirija o aconseje a las personas que litiguen ante él.

Artículo 315.- Se impondrán de dos a cinco años de prisión, multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que no cumpla con las disposiciones constitucionales y demás leyes, referentes a la inmunidad constitucional de los servidores públicos.

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

CAPÍTULO I OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA

Artículo 316.- Se impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a doscientos cincuenta días de salario, sin que exceda de la sanción correspondiente al delito cometido, al que después de la ejecución del mismo y sin haber participado en éste:

- I. Ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de la justicia;
- II. Oculte, altere, inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u otras pruebas del delito;
- III. Oculte o asegure el instrumento, el objeto, el producto o el provecho del delito.

Artículo 317.- Se impondrá de un mes a dos años de prisión y multa de cien a doscientos cincuenta días de salario, al que:

- I. Pueda impedir un delito con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, y se abstuviere voluntariamente de hacerlo;
- II. No denuncie ante el ministerio público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía, los delitos que sepa se han cometido, se estén cometiendo o vayan a cometerse, si son de los que deben perseguirse de oficio, y particularmente si los pasivos u ofendidos por dichos ilícitos provienen de grupos vulnerables;
- III. Requerido por la autoridad, no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes;
- IV. Al que, aunque conozca la procedencia ilícita de los objetos los reciba en prenda o depósito.

Artículo 318.- No se impondrá sanción alguna en los casos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 316 y III del 317, cuando quien lo realiza sea:

- I. Ascendiente o descendiente consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, o tenga parentesco por afinidad o por adopción;
- II. Cónyuge, concubina o concubinario, pareja de hecho o pariente consanguíneo en línea colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado.

Artículo 319.- Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de setenta a doscientos días de salario, así como la suspensión del ejercicio de la profesión de seis meses a un año, al médico, cirujano, partero, enfermero o cualquier otro profesionista sanitario que omitiera denunciar a la autoridad correspondiente los delitos de que hubiere tenido conocimiento con motivo del ejercicio de su profesión.

Artículo 320.- Al que, sin ser parte en un procedimiento judicial, influya, por cualquier medio, en quien es perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que se retracte de su dictamen, declaración, informe o traducción, o lo preste y así falte a su deber o a la verdad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días de salario. Cuando el medio empleado sea la violencia, las sanciones se incrementarán en una mitad.

Artículo 321.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aumentarán en una mitad cuando se trate de un servidor público que tenga un interés personal sobre el caso y utilice los medios derivados de su cargo, en ejercicio de sus funciones. En este caso, procederá la destitución del empleo, cargo o comisión y, en su caso, suspensión por un término igual al de la sanción de prisión.

CAPÍTULO II

EVASIÓN DE PRESOS, DETENIDOS O RETENIDOS

Artículo 322.- Se impondrán de dos a seis años de prisión, multa de doscientos a setecientos días de salario y, en su caso, suspensión para desempeñar cargo, empleo o profesión hasta por igual término que la sanción de prisión, a quien indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente privada de aquélla.

Artículo 323.- Si quien favorece la fuga es ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, pariente consanguíneo colateral hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, pariente por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, concubina o concubinario, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a doscientos días de salario.

Artículo 324.- Se aumentarán en un tercio las sanciones previstas en los artículos anteriores a quien favorezca al mismo tiempo, o en un solo acto, la evasión de dos o más personas privadas legalmente de su libertad.

Artículo 325.- Se aumentarán en una mitad las sanciones previstas en los artículos anteriores y, en su caso, destitución e inhabilitación para desempeñar cargo, empleo o profesión, cuando:

- I. Se haga uso de violencia en las personas, para favorecer la evasión;
- II. Siendo servidor público, indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión.

Artículo 326.- Si la reaprehensión del prófugo se lograre por gestión del responsable de la evasión, se impondrán a éste un tercio de las sanciones que correspondan al delito cometido.

CAPÍTULO III QUEBRANTAMIENTO DE SANCIONES

Artículo 327.- Al que se fugue y esté sujeto a alguna sanción privativa de libertad o a medida cautelar, no se le contará el tiempo que pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva, ni se tendrá en cuenta la buena conducta que haya tenido antes de la fuga.

Artículo 328.- Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, salvo cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos, o ejerciere violencia, caso en que se le impondrá sanción de uno a tres años de prisión.

Artículo 329.- Se impondrán de treinta a sesenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad o multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario:

- I. Al que cuando esté sometido a vigilancia de la autoridad, no proporcione a ésta los informes que se le pidan sobre su conducta;
- II. A quien se le hubiere prohibido ir a determinado lugar o a residir en él y viole la prohibición.

Artículo 330.- Al que esté suspendido o inhabilitado para ejercer su empleo, cargo, comisión, profesión u oficio, y quebrante su condena, se le impondrá multa de doscientos a cuatrocientos días de salario.

CAPÍTULO IV REVELACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SUJETOS EN SITUACIÓN DE RIESGO

Artículo 331.- Con independencia de las responsabilidades civiles y administrativas que pudieren corresponder, al que revele información relacionada con las medidas de protección acordadas para algún sujeto en situación de riesgo, y comprometa con ello la vida, la integridad corporal o la seguridad de la persona protegida, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a doscientos cincuenta días de salario. En caso de tratarse de un servidor público, la sanción se incrementará en una tercera parte, y se impondrá destitución del cargo e inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión por un tiempo igual al de la sanción de prisión.

CAPÍTULO V DELITOS DE ABOGADOS, DEFENSORES O LITIGANTES

Artículo 332.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión o multa de doscientos a quinientos días de salario, al abogado, defensor o litigante que:

- I. A sabiendas, alegue hechos notoriamente falsos o leyes inexistentes;
- II. A sabiendas y, fundándose en documentos falsos o sin valor, o en testigos falsos, ejercite acción u oponga excepciones en contra de otro, ante autoridades judiciales o administrativas;
- III. Simule un acto jurídico o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio;
- IV. Patrocine o ayude a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio o en negocios conexos, o cuando acepte el patrocinio de alguno y admita después el de la parte contraria;
- V. Abandone el mandato, patrocinio o defensa de un negocio judicial, administrativo o de trabajo, sin motivo justificado;
- VI. Use cualquier incidente o medio notoriamente improcedente o ilegal con la finalidad de perder un juicio en perjuicio de la persona que represente o defienda;
- VII. No ofrezca ni desahogue pruebas fundamentales para la defensa dentro de los plazos previstos por la ley, cuando tenga la posibilidad de ofrecerlas y desahogarlas.

Artículo 333.- Si el responsable de los delitos previstos en este Capítulo fuere defensor particular, se le impondrá, además, suspensión para desempeñar empleo o su profesión hasta por igual término que la sanción de prisión. Si el responsable fuere defensor de oficio, se le impondrá, además, destitución e inhabilitación para desempeñar cargo, empleo o profesión

de defensor. Para este efecto, los jueces comunicarán al director general de defensores de oficio y a las asociaciones y barras de abogados las sanciones respectivas.

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DELITOS CONTRA LA VERACIDAD NECESARIA PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO I
FRAUDE PROCESAL

Artículo 334.- Al que sin ser abogado, defensor o litigante, simule un acto jurídico o escrito judicial, altere algún elemento de prueba o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad para obtener una resolución judicial o administrativa de la que derive algún perjuicio o beneficio indebido, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cien a quinientos días de salario.

CAPÍTULO II
FALSEDAD ANTE AUTORIDAD

Artículo 335.- Al que rinda protesta, ante cualquier autoridad, de que en sus declaraciones se conducirá con verdad y lo haga con falsedad, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario.

Artículo 336.- Si antes de la resolución correspondiente, la persona se retracta espontáneamente de sus declaraciones falsas, se reducirán en un tercio las sanciones previstas en el artículo anterior.

CAPÍTULO III
VARIACIÓN DEL NOMBRE O DOMICILIO

Artículo 337.- Se impondrá de tres meses a un año de prisión, o de cincuenta a ciento veinte jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que, ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, oculte o niegue su nombre o apellidos, se atribuya uno distinto del verdadero, oculte o niegue su domicilio o designe como tal uno distinto al verdadero.

TÍTULO DÉCIMO NOVENO
DELITOS CONTRA EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE LA AUTORIDAD

CAPÍTULO I
IMPOSICIÓN FORZADA DE UN ACTO ILEGAL

Artículo 338.- Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de ochenta a ciento sesenta días de salario a quien por medio de violencia física o psicológica obligue a la

autoridad a ejecutar un acto propio de sus atribuciones sin los requisitos legales, o un acto que no esté dentro de sus atribuciones.

Cuando el delito se cometiere por grupo o grupos de tres o más personas, a los instigadores, dirigentes o autores intelectuales se les aumentará en una mitad las sanciones señaladas en el párrafo anterior.

CAPÍTULO II DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES

Artículo 339.- Al que sin causa legítima rehúse prestar un servicio al que la ley le obliga, o desobedezca un mandato legítimo de la autoridad, se le impondrán de seis meses a un año de prisión y multa de cien a doscientos días de salario.

Artículo 340.- Al que por medio de violencia física o moral se oponga a que la fuerza pública, o sus agentes, ejerzan alguna de sus funciones, o resista el cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad que satisfaga todos los requisitos legales, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de ciento veinte a ciento sesenta días de salario.

Artículo 341.- El que cuando esté obligado a declarar ante la autoridad u otorgar la protesta de ley al rendir su declaración, se niegue a ello, se le impondrán de veinticuatro a setenta y dos jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de treinta a ochenta días de salario.

Artículo 342.- Cuando la ley autorice el empleo de medidas de apremio para hacer efectivos los mandatos de la autoridad, la consumación de los delitos de desobediencia y resistencia de particulares se producirá en el momento en que se agote el empleo de tales medidas de apremio.

CAPÍTULO III OPOSICIÓN A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJOS PÚBLICOS

Artículo 343.- Al que con actos materiales, y empleando violencia, trate de impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a doscientos cincuenta días de salario, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido.

Cuando este delito se cometa de común acuerdo por varias personas, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de ciento veinte a doscientos cincuenta días de salario, sin perjuicio de las sanciones aplicables por la comisión de otros delitos.

CAPÍTULO IV QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS

Artículo 344.- Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad, se le impondrá de veinticuatro a setenta y dos jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario.

CAPÍTULO V ULTRAJES A LA AUTORIDAD

Artículo 345.- Al que cometa un delito en contra de un servidor público en el acto de ejercer sus funciones, o con motivo de ellas, se le impondrá de un mes a un año de tratamiento en semilibertad, sin perjuicio de las sanciones que sean aplicables por el delito cometido.

TÍTULO VIGÉSIMO DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS SÍMBOLOS INSTITUCIONALES

CAPÍTULO I USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES O UNIFORMES

Artículo 346.- Se impondrán de noventa a ciento ochenta días de tratamiento en semilibertad y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario al que, públicamente y sin derecho, use uniforme, insignia, distintivo, identificación o condecoración oficial. Si se tratare de aquellos considerados de uso exclusivo de alguna corporación policíaca, la sanción será de uno a cuatro años de prisión y multa de ochenta a ciento sesenta días de salario.

CAPÍTULO II ULTRAJE O USO INDEBIDO DE INSIGNIAS PÚBLICAS

Artículo 347.- Al que ultraje las insignias del Estado, de un municipio o de cualquiera de sus instituciones, o haga uso indebido de ellos, se le impondrán de un mes a un año de prisión y multa de cien a doscientos cincuenta días de salario.

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

CAPÍTULO ÚNICO PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD

Artículo 348.- Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario, al que prive de su libertad a una persona sin el propósito de:

- I. Obtener un lucro;
- II. Realizar un delito con motivo de la privación de la libertad;
- III. Causar un daño o perjuicio al sujeto pasivo o a cualquier tercero;

- IV. Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o causarle daño para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera.

Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.

Artículo 349.- Las sanciones previstas en el artículo anterior se aumentarán en un tercio cuando la privación de la libertad:

- I. Se lleve a cabo en persona menor de edad o mayor de setenta años, o en aquélla que, por cualquier circunstancia, esté imposibilitada de resistir o en situación de inferioridad física respecto del agente;
- II. Se prolongue por más de cuarenta y ocho horas;
- III. Se realice por quien sea servidor público o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las fuerzas armadas permanentes mexicanas, o se ostente como tal sin serlo;
- IV. Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta.

TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, EL AMBIENTE Y LOS ECOSISTEMAS

CAPÍTULO I RIESGOS PARA LA SALUD

Artículo 350.- Se impondrán sanción de tres meses a un año de tratamiento en semilibertad y multa de cien a trescientos días de salario, al dueño, encargado, empleado o dependiente de cualquier establecimiento que venda, suministre o distribuya alimentos, bebidas o medicamentos caducos o en mal estado que puedan poner en riesgo la salud.

Igual sanción se impondrá al que sustituya una medicina específicamente señalada en una receta médica por otra que sea dañina o resulte ineficaz al padecimiento para el cual se prescribió.

Artículo 351.- Se impondrán de un mes a un año de tratamiento en semilibertad y multa de cincuenta a doscientos días de salario, a quien:

- I. Efectúe trabajos sin permiso y vigilancia de las autoridades sanitarias, de tal modo que modifiquen desfavorablemente las condiciones sanitarias del medio y pongan en peligro a la colectividad;
- II. Sin cumplir con las disposiciones sanitarias, sitúe dentro de las zonas urbanizadas corrales, establos, rastros, zahúrdas, plantas avícolas o conejeras, con fines comerciales.

Artículo 352.- Al que fabrique, venda, suministre o distribuya bebidas adulteradas con sustancias que pongan en riesgo la salud o produzcan la muerte, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, multa de trescientos a ochocientos días de salario y decomiso del producto del delito, sin perjuicio de las sanciones que sean aplicables por la comisión de otros delitos.

CAPÍTULO II PELIGRO DE CONTAGIO Y PROPAGACION DE ENFERMEDADES

Artículo 353.- A quien con conocimiento de padecer una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio a otro, por relaciones sexuales u otro medio de transmisión, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días de salario, sin perjuicio de que la autoridad judicial competente determine su cuidado o vigilancia en un establecimiento adecuado hasta que cese el período infectante.

Si la enfermedad padecida fuera incurable o la víctima fuera la pareja habitual, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de quinientos a dos mil días de salario.

Este delito se perseguirá por querrela.

Artículo 354.- Además de las sanciones establecidas en el artículo anterior, el sujeto activo pagará a la víctima todos los gastos del tratamiento médico derivados de la enfermedad contagiada, como parte de la reparación del daño y los perjuicios que se ocasionen.

CAPÍTULO III ALTERACIÓN Y DAÑOS AL AMBIENTE

Artículo 355.- Se impondrán de un mes a tres años de prisión y multa de cincuenta a tres mil días de salario al que, sin contar con las autorizaciones relativas, o en violación a las normas de seguridad y operación a que se refiere la legislación ambiental del Estado, realice, autorice u ordene la realización de actividades que, consideradas como no riesgosas en ese mismo ordenamiento, ocasionen graves daños a la salud pública o a los ecosistemas.

Cuando las actividades consideradas como no riesgosas a que se refiere el párrafo anterior se llevan a cabo en un centro de población, se podrán aumentar las sanciones hasta por un año más de prisión y multa hasta por el importe de seis mil días de salario mínimo.

Artículo 356.- Se impondrán de un mes a tres años de prisión y multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo al que, sin autorización de la autoridad estatal o municipal, o en contravención a los términos en que esta autorización haya sido concedida, fabrique, elabore, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, reutilice, recicle, recolecte, trate, deseche, descargue, disponga o, en general, realice actos con materiales o residuos que no sean considerados peligrosos según la legislación ambiental del Estado que le compete conocer al Estado o Municipios, y que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, a los ecosistemas o sus elementos, previo dictamen que al efecto deberá emitir la dependencia u organismo que para la aplicación de la ley en la materia se haya designado.

Artículo 357.- Se impondrán de un mes a tres años de prisión y multa de cincuenta a tres mil días de salario al que, con violación a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias, despidan o descargue en la atmósfera, o lo autorice u ordene, gases, humos o polvos, que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna o a los ecosistemas, en el ámbito de la competencia estatal o municipal.

Artículo 358.- Se impondrán de un mes a tres años de prisión y multa de cincuenta a tres mil días de salario al que, sin autorización de la autoridad competente y en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, descargue, deposite o infiltre, u ordene o autorice que se haga, aguas residuales, desechos o contaminantes, en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de aguas de jurisdicción estatal o, en su caso municipal, que ocasione o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o a los ecosistemas.

Cuando se trate de aguas que sean destinadas para ser entregadas en bloque a los centros de población, la sanción de prisión se podrá aumentar hasta un año más a la fijada en el presente artículo.

Artículo 359. Se impondrán de un mes a tres años de prisión y multa de cincuenta a tres mil días de salario a quien, en contravención a las disposiciones legales aplicables, rebase los límites fijados en las normas oficiales mexicanas, en la generación de ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica, olores o contaminación visual, en zonas de jurisdicción estatal o municipal, que ocasionen graves daños a la salud pública, en su caso, o a los ecosistemas.

Artículo 360.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a seis mil días de salario a quien, sin tomar las debidas precauciones y sin informar previamente a las autoridades municipales y ejidales, inicie un incendio que rebase los límites del terreno que posea y dé lugar a un daño generalizado.

Artículo 361.- Se impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo, a quien por sí, interpósita persona o con el carácter de representante legal, ocupe, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos, en los siguientes lugares:

- I. Reserva ecológica municipal o estatal, así como en zonas consideradas no aptas para la vivienda de acuerdo al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente;
- II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico aplicables, así como lo establecido en el Plan o Programas de Desarrollo Urbano o cualquier otro plan o programa para asentamientos humanos aplicables;
- III. Drenajes naturales o no naturales; y,
- IV. Área verde en suelo urbano.

Las penas previstas en este artículo se aumentaran en una mitad cuando la ocupación se realice con violencia, así como a quien instigue, promueva, dirija o incite la comisión de las conductas anteriores.

Artículo 362.- Cuando en la comisión de un delito previsto en este Capítulo intervenga un servidor público en ejercicio, con motivo de sus funciones, o se aproveche de su calidad de servidor, la sanción de prisión se aumentará en una mitad y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión, por el mismo término de la sanción privativa de libertad.

Para los efectos del presente Capítulo, la reparación del daño incluirá además:

- I. La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito;
- II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo.

TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO DELITOS EN MATERIA ELECTORAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 363.- Para los efectos de este Título se entiende por:

- I. Servidor público, las personas mencionadas en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Campeche;
- II. Funcionario electoral, quien, en los términos de la legislación electoral local, integre los órganos que cumplen funciones electorales;
- III. Funcionario partidista, al dirigente de algún partido político, sus candidatos o los ciudadanos a quienes se les otorgue representación en los procesos electorales;
- IV. Candidato, el ciudadano registrado formalmente como tal por la autoridad competente;
- V. Documentos públicos electorales, las actas oficiales de la jornada electoral y, en general, los documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios del Instituto Electoral del Estado;
- VI. Material electoral, los elementos físicos, tales como urnas o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, tinta indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral.

Artículo 364.- Se impondrán de dos meses a un año de prisión y multa de cincuenta a doscientos cincuenta días de salario, a quien:

- I. Realice actos de propaganda política a favor de cualquier partido o candidato dentro de los tres días anteriores al de la jornada electoral y en la propia jornada;
- II. Impida de cualquier manera la instalación, funcionamiento o cierre de alguna casilla electoral;
- III. Destruya o altere boletas o documentos electorales fuera de los casos permitidos por la ley;
- IV. Vote cuando esté impedido por la ley;
- V. Vote más de una vez o suplante a otro elector;

- VI. Organice personalmente reuniones de cualquier tipo el día de la elección con el propósito deliberado e inequívoco de trasladar electores a votar unánimemente por un determinado candidato o partido político;
- VII. Obligue a votar por determinado partido o candidato a las personas que se encuentren bajo su autoridad o dependencia económica;
- VIII. Induzca a otro a votar por determinado partido o candidato, mediante paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa, o presión intimidatoria de causarle un daño a su persona, patrimonio o familia;
- IX. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto a favor de un determinado partido político, coalición o candidato;
 - X. Introduzca en, o sustraiga de, las urnas, ilícitamente, una o más boletas electorales;
 - XI. Recoja, sin causa prevista por la ley, credenciales de elector de los ciudadanos;
 - XII. Viole de cualquier manera el secreto del voto;
 - XIII. Destruya materiales electorales;
 - XIV. Impida de cualquier forma el traslado o entrega de los documentos públicos electorales o entrega a los órganos correspondientes;
 - XV. Publique o difunda los resultados de encuestas o sondeos de opinión que dé a conocer las preferencias de los ciudadanos, durante los quince días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de casillas;
- XVI. Acuse sin prueba o denuncie injustificadamente por los delitos que prevé este Título a otro ciudadano, a cualquier funcionario electoral, servidor público o funcionario partidista.

Artículo 365.- Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de ciento veinte a trescientos días de salario al funcionario electoral que en el ejercicio de sus funciones:

- I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga uso indebido de documentos relativos al Registro de Electores;
- II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral;
- III. Se niegue, injustificadamente, a reconocer la personalidad de los funcionarios partidistas;
- IV. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos públicos electorales o materiales electorales, sin mediar causa justificada;
- V. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por el Código Electoral del Estado, o sin causa justificada, la instale en lugar distinto al legalmente señalado o impida su instalación;
- VI. Se niegue sin causa justificada a admitir el voto de los electores que tengan derecho a sufragar;
- VII. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya indebidamente la documentación electoral;
- VIII. Obstruya el desarrollo normal de la jornada electoral;
- IX. Ejercza presión sobre los electores y los obligue a votar por un determinado candidato o partido político o a abstenerse de emitir sufragio;

- X. Expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o coalición o coarte los derechos que la ley les concede;
- XI. Se niegue expresamente sin causa justa a recibir algún recurso previsto en la ley;
- XII. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales;
- XIII. Propale de manera pública noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados.

Artículo 366.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión, multa de cien a quinientos días de salario, destitución e inhabilitación por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que:

- I. Impida u obstaculice la reunión de una asamblea o manifestación pública, o cualquier acto legal de propaganda política;
- II. Proporcione apoyo a través de sus subordinados y utilice el tiempo correspondiente a sus labores para que éstos presten servicio a un partido político o candidato, o destine para éstos, fondos, bienes, equipos o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo. Si con motivo de los hechos se cometieren otros ilícitos, se aplicarán las reglas del concurso de delitos;
- III. Impida a sus subordinados cumplir con las funciones electorales que le han sido encomendadas;
- IV. Intimide expresamente a sus subordinados para votar, o abstenerse de hacerlo, respecto a algún candidato o partido determinado;
- V. Condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio en favor de algún partido político o candidato;
- VI. Se niegue a prestar el servicio público al que está obligado, conforme al Código Electoral del Estado;
- VII. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas;
- VIII. Prive de la libertad a los candidatos o a los representantes de partidos políticos y pretexto delitos o faltas inexistentes.

Artículo 367.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de doscientos a seiscientos días de salario al funcionario partidista que:

- I. Impida la instalación o cierre de una casilla, o abra o cierre la casilla fuera de los tiempos previstos por el Código Electoral del Estado;
- II. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido del material electoral;
- III. Ejercer violencia sobre los funcionarios electorales y obstaculice el desarrollo normal de la votación;
- IV. Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral;
- V. Ejercer presión sobre los electores y los induzca a la abstención o a votar por un candidato o partido en la casilla o en el lugar en donde los electores se encuentren formados;

- VI. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de los resultados oficiales, con objeto de alterar el orden;
- VII. Simule un acto jurídico o falsifique un escrito relacionado con el proceso electoral;
- VIII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.

Artículo 368.- Se impondrá multa de doscientos a seiscientos días de salario, al ministro de cualquier culto o asociación religiosa que, por cualquier medio, induzca al electorado a votar a favor o en contra de determinado partido o candidato o fomente la abstención.

Artículo 369.- Se impondrá multa de cuarenta a ciento cuarenta días de salario al notario público o a quien desempeñe esa función por ministerio de ley que, sin causa justificada, se niegue a dar fe de los actos en que deba intervenir en los términos de la ley electoral.

Artículo 370.- Se impondrá suspensión de sus derechos políticos por un año a quienes, cuando hayan sido electos diputados o presidente, regidor o síndico de un H. Ayuntamiento o H. Junta Municipal o comisario Municipal, no se presenten, sin causa justificada a juicio del Congreso, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado por la ley.

Artículo 371.- Se impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de cincuenta a doscientos cincuenta días de salario a quien:

- I. Proporcione documentos o información falsa al Registro de Electores para obtener la credencial de elector;
- II. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga uso indebido de la credencial que le expida el Registro de Electores;
- III. Altere las listas nominales de Electores.

Artículo 372.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se podrán aumentar en una cuarta parte si las conductas son cometidas por personal del órgano que tenga a su cargo el servicio del Registro de Electores.

TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

CAPÍTULO I REBELIÓN

Artículo 373. Se impondrán de dos a quince años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario a los que, sin ser militares, con violencia y uso de armas traten de:

- I. Abolir, suspender, destruir o reformar la Constitución Política del Estado o de las Instituciones emanadas de ella;
- II. Separar de su cargo al Gobernador, a los Diputados Locales, al Procurador General de Justicia, al Secretario de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad de la

Administración Pública Estatal, a los Magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia o a los integrantes de los HH. Ayuntamientos.

Será aplicable la misma sanción a quien resida en el Estado y proporcione a los rebeldes armas, municiones, dinero, víveres o medios de transporte o de comunicación, o impida que las tropas regulares reciban esos auxilios. La sanción podrá disminuirse hasta la mitad si reside dentro del territorio ocupado por los rebeldes.

Artículo 374.- Si se trata de servidor público, estatal o municipal, que en virtud de su cargo tenga acceso a documentos o informes de interés estratégico y los proporcione a los rebeldes se le impondrán sanción de cinco a veinte años de prisión, multa de mil a dos mil días de salario e inhabilitación definitiva para desempeñar cargo o empleo público.

Artículo 375.- Cuando durante una rebelión se cometiere otro ilícito, se aplicarán las reglas del concurso de delitos. Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de los que se causen fuera del mismo, serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten.

Artículo 376.- No se sancionará a los que depongan las armas antes de ser detenidos, si no hubiesen cometido algún delito.

CAPÍTULO II SABOTAJE

Artículo 377.- Se impondrán de cinco a doce años de prisión y multa de ciento ochenta a trescientos ochenta días de salario al que, con el fin de trastornar gravemente la vida económica, social o cultural del Estado, o alterar la capacidad de éste para asegurar el orden público, dañe, destruya o entorpezca:

- I. Servicios públicos o centros de producción o distribución de bienes y servicios básicos;
- II. Instalaciones fundamentales de instituciones de docencia o investigación;
- III. Recursos esenciales que el Estado destine para el mantenimiento del orden público.

CAPÍTULO III MOTÍN

Artículo 378.- Se impondrán de uno a siete años de prisión y multa de cien a doscientos días de salario a los que, para conseguir que se les reconozca o conceda algún derecho, o pretextando su ejercicio, o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan de forma tumultuaria y perturben el orden público con violencia o amenacen a una autoridad estatal para intimidarla y obligarla a tomar una determinación.

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO DELITOS CONTENIDOS EN LEYES ESPECIALES

CAPÍTULO I NARCOMENUDEO, SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS

Artículo 379.- En los casos de Narcomenudeo, Secuestro y Trata de Personas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, respectivamente.

CAPÍTULO II PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 380.- Se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de mil a cinco mil días de salario al que incurra en alguna de las conductas contenidas en el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor los treinta hábiles de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- Se abroga el Código Penal del Estado de Campeche, no vigente, aprobado mediante decreto No. 169, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche No. 4090 de fecha 04 de Agosto de 2008.

Tercero.- Como consecuencia de lo señalado en el transitorio segundo que antecede, al entrar en vigor el presente Código quedará abrogado el Código Penal del Estado de Campeche, vigente desde el 2 de enero de 1976, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 16 de diciembre de 1975, pero seguirá aplicándose por los hechos ejecutados durante su vigencia, salvo que las disposiciones del nuevo Código beneficien al imputado o sentenciado o que manifiesten su voluntad de acogerse al presente ordenamiento.

Cuarto.- Se derogan los tipos penales contenidos en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Campeche y en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche, así como las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal que se opongan al contenido del presente decreto.

Quinto.- La modificación o reubicación de cualquier tipo penal a que se refiere este decreto, no implicará la libertad de los responsables por los delitos cometidos con anterioridad a su vigencia, siempre que los hechos se comprendan en los tipos penales modificados. Asimismo, las acciones u omisiones que en el presente decreto hayan dejado de tipificarse como delitos,

producirán la inmediata libertad de los procesados o sentenciados y cesará el procedimiento o los efectos de la sentencia, con excepción de la reparación del daño cuando ésta ya se hubiere hecho efectiva.

San Francisco de Campeche, Mpio. y Estado de Campeche, a 20 de junio de 2012.

Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés
Gobernador Constitucional del Estado

Mtra. Perla Karina Castro Farías
Subsecretaria "A" de Gobierno, Encargada
del Despacho de la Secretaría de Gobierno